

# El papel del sector privado en las políticas de cooperación al desarrollo en América Latina y el Caribe

Estudio de casos seleccionados

Laura Maffei

Esta publicación ha sido producida con el apollo de la Asociación por la Efectividad del Desarrollo (CPDE).

La autora es Laura Maffei.

Esta publicación está disponible en línea: [www.ituc-csi.org/DFI-study](http://www.ituc-csi.org/DFI-study)

## Índice

Lista de Acrónimos y Siglas .....	4
<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>6</b>
<b>2. OBJETIVOS .....</b>	<b>7</b>
<b>3. METODOLOGÍA.....</b>	<b>8</b>
<i>a) Revisión general de bibliografía e identificación de casos de interés:.....</i>	<i>8</i>
<i>b) Selección de casos para analizar:.....</i>	<i>8</i>
<i>c) Análisis de casos seleccionados: .....</i>	<i>9</i>
<i>d) Consulta, integración y síntesis: .....</i>	<i>10</i>
<b>4. ESTUDIO DE CASOS SELECCIONADOS.....</b>	<b>11</b>
<i>A. Perú: Los fondos de cooperación al servicio del sector minero transnacional .....</i>	<i>11</i>
<i>B. Haití: El fracaso de la cooperación internacional. Beneficios para las corporaciones, y vulneración de derechos para el pueblo haitiano .....</i>	<i>26</i>
<i>C. Colombia: Agua y saneamiento en Cartagena. El conflicto entre la cooperación y la maximización del beneficio privado .....</i>	<i>44</i>
<i>D. El Salvador: promover la adecuación de las MyPE a los requerimientos de las grandes transnacionales .....</i>	<i>56</i>
<b>5. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>71</b>
<i>De la provisión de servicios, al diseño y gestión de proyectos de cooperación .....</i>	<i>71</i>
<i>Objetivos, beneficios y beneficiarios .....</i>	<i>71</i>
<i>La medida del aporte a un desarrollo local sustentable .....</i>	<i>72</i>
<i>Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información .....</i>	<i>73</i>
<b>6. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA .....</b>	<b>76</b>
<b>7. ANEXOS.....</b>	<b>88</b>
<i>Anexo I: Entrevistas y sitios Web revisado .....</i>	<i>88</i>
<i>Anexo II: casos identificados; resultados preliminares .....</i>	<i>90</i>

## Lista de Acrónimos y Siglas

Acuacar	Aguas de Cartagena
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AFD	Agence Française de Développement
AFL-CIO	American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
AgBar	Aguas de Barcelona
ATF	Americans for Tax Fairness (Estadounidenses por la justicia impositiva)
AusAID	Agencia Australiana de Cooperación Internacional
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CEPR	Center for Economics and Policy Research
CFI	Corporación Financiera Internacional
CIDA	Canadian International Development Agency (Agencia Canadiense de Cooperación Internacional)
CNSA	Coordination Nationale de Sécurité Alimentaire, Haití
CONAMyPE	Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
CONGDE	Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España
CSA	Confederación Sindical de las Américas
CSI	Confederación Sindical Internacional
CTSP	Confédération des Travaileurs (euses) des Secteurs Public & Privé
DFATD	Departamento de Asuntos Internacionales, Comercio y Desarrollo, Canadá
FCAS	Fondo de Cooperación para Agua Y Saneamiento
FNTMMSP	Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú
FtF	Feed the Future (Alimentar el Futuro)
GDA	Global Development Alliance (Alianza para el Desarrollo Mundial)
IHRC	Interim Haiti Reconstruction Commission (Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití)
IMARE	Alianza para la Inclusión al Mercado de Empresarios Rurales, Guatemala
ISF	Ingeniería Sin Fronteras
LAIF	Latin American Investment Facility
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas, Haití
MINEM	Ministerio de Energía y Minas, Perú
MINUSTAH	Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

MTEP	Ministerio de Trabajo y Políticas de Empleo, Perú
MyPE	Micro y Pequeñas Empresas
OCMAL	Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
OEA	Organización de Estados Americanos
OEFA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Perú
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OLCA	Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
PERCAN	Proyecto Perú-Canadá para la Reforma de los Recursos Minerales
PIC	Parque Industrial Caracol, Haití
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRODIVCOM	Proyecto para la Diversificación y la Competitividad de las Empresas Asociativas de las Regiones Mineras del Perú
RSC	Responsabilidad Social Corporativa
RSE	Responsabilidad Social Empresarial
RSCD	Red Sindical de Cooperación al Desarrollo
SOCODEVI	Sociedad Canadiense de Cooperación para el Desarrollo Internacional
SONAPI	Société Nationale des Parcs Industriels, Haití
USAID	Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional      ACP - Afrique Caraïbes Pacifique

## 1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años hay una presión creciente de distintos países, agencias y actores de la cooperación para dar un mayor peso al sector privado dentro del diseño y el acceso a los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Tanto en las discusiones sobre la Financiación para el Desarrollo (FpD) como en las negociaciones del marco post-2015, éste se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda política.

Uno de los argumentos que sustentan esta idea es que una mayor participación del sector privado brindaría la posibilidad de aumentar los fondos destinados al desarrollo. Se desprende que, para poder cumplir con los objetivos del desarrollo, la comunidad internacional “necesita” del sector privado. Por otra parte, el fortalecimiento del sector privado en los países receptores de la ayuda contribuiría a dinamizar la economía y el desarrollo local.

Aunque discutibles, estos argumentos podrían ser válidos. Sin embargo, lo que se observa en la práctica es que muchas veces las estructuras de la cooperación y fondos declarados como AOD acaban siendo utilizados en beneficio del sector privado, en particular grandes empresas transnacionales, a través de diversos mecanismos: subsidios directos o indirectos, promoción de la privatización de servicios, contribución a mejorar la imagen de determinadas compañías, facilitación de acciones de *lobby* frente a gobiernos, entre otros.

En las páginas que siguen se analizan cuatro casos en los que la cooperación internacional con países de América Latina ha seguido alguno o varios de estos mecanismos para beneficio de determinadas empresas transnacionales:

- a) Perú: la cooperación de Canadá (CIDA) alineada con los intereses de la gran minería transnacional (Barrick Gold, Río Tinto y otros);
- b) Haití: cooperación internacional de diversas agencias (BID, USAID y otros) que favorecen a maquilas textiles, en particular a la Surcoreana S&H Global;
- c) Colombia: proyectos de cooperación de España (AECID) vinculados a la empresa Aguas de Barcelona;
- d) El Salvador: las relaciones entre la cooperación de EEUU (USAID) y Walmart.

A través del análisis de estos casos, se documentan ejemplos concretos sobre cómo se articulan distintos actores de cooperación y el sector privado, mostrando la verdadera intencionalidad por detrás de las argumentaciones en favor de ampliar aún más el papel del sector privado en las políticas de cooperación al desarrollo. Asimismo, quedan señalados varios puntos de entrada e indicios sobre los que sería interesante ampliar la investigación a futuro.

## 2. OBJETIVOS

El presente estudio se propone analizar casos concretos que permitan ejemplificar las formas en que se da la participación del sector privado en las políticas de cooperación al desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, en particular las formas en que acceden o se benefician de los fondos de cooperación, y su influencia en las estrategias de desarrollo de los países receptores.

Se propone también identificar consecuencias negativas o positivas que estas tendencias podrían conllevar, con especial énfasis en los derechos humanos laborales.

A través de este análisis, el Estudio busca aportar en la construcción de una posición sindical crítica sobre el desvío de fondos de cooperación en beneficio del sector privado, en defensa del control público y la rendición de cuentas transparente sobre las políticas y los flujos de cooperación. Busca también visibilizar riesgos y sensibilizar a las organizaciones sindicales sobre la necesidad de actuar.

### 3. METODOLOGÍA

La elaboración del presente estudio se desarrolló en varias etapas sucesivas entre los meses de agosto y diciembre de 2015:

#### *a) Revisión general de bibliografía e identificación de casos de interés:*

La primera etapa del proceso de investigación consistió en la revisión de bibliografía, lo que incluyó: portales de noticias; sitios Web de agencias de cooperación y otros organismos públicos relacionados con la cooperación internacional al desarrollo; y páginas de Internet, informes y documentos de organizaciones intergubernamentales, organizaciones sociales y sindicales. Se realizó también una consulta amplia con organizaciones y especialistas que trabajan en temas de cooperación al desarrollo. (Ver Anexo I para un listado de organizaciones consultadas y sitios Web visitados)

Esta primera etapa llevó un tiempo considerable dada la cantidad de documentación revisada y consultas realizadas vía telefónica o por correo electrónico.

#### *b) Selección de casos para analizar:*

Esta extensa revisión bibliográfica y de consulta permitió identificar al menos 22 casos de posible interés para estudio (Ver Anexo II para el listado de posibles casos de interés). Junto con miembros de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) en América Latina se evaluaron los siguientes criterios a fin de consensuar un primer listado de casos de posible interés:

- ✓ Tipos de participación del sector privado en las políticas de desarrollo: contratación de proyectos de infraestructura, asociaciones público-privadas (APP), proyectos destinados a la creación de tejido empresarial, apalancamiento de inversiones, ayuda condicionada, etc.
- ✓ Tipos y actores de cooperación: financiadores bilaterales y multilaterales, cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y de diversas organizaciones intermediarias.
- ✓ Diversidad regional: Centroamérica, Caribe, Región Andina, Cono Sur.
- ✓ Marco temporal: proyectos en ejecución o ejecutados en el período 2010-2015

De este primer análisis se decidió avanzar en el análisis de los siguientes casos a fin de determinar su pertinencia:



- ✓ Perú: cooperación internacional y minería
- ✓ Haití: fracaso de la cooperación internacional y sector privado en general
- ✓ Colombia: AECID (España) – Aguas de Barcelona
- ✓ El Salvador: USAID (EEUU)– Walmart
- ✓ LAIF (*Latin American Investment Facility* – Comisión Europea)
- ✓ CFI (Corporación Financiera Internacional – Banco Mundial)

Finalmente, por dificultades de acceso a la información y motivos de tiempo en un caso, y por representar una cantidad menor de AOD en el otro, se descartaron los últimos dos casos.

### ***c) Análisis de casos seleccionados:***

En la sección correspondiente a cada uno de los casos se especifican los aspectos metodológicos particulares. En este apartado se hace referencia a los aspectos generales que guiaron el proceso de investigación.

Para cada caso se partió de un análisis de la información pública disponible de fuentes gubernamentales de los países donantes para intentar identificar información oficial específica. Una vez identificados los proyectos que podrían ser de interés, se analizó en profundidad la documentación puesta a disposición por estas mismas fuentes: informes de avance de proyecto, informes de evaluación, documentación financiera, etc.

Los datos e informaciones oficiales recabadas se cruzaron con informaciones públicas de las empresas involucradas: informes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE), informes a accionistas, documentos e informes presentados por las empresas en diversos ámbitos.

En paralelo se hizo una revisión de noticias publicadas por organismos gubernamentales de países receptores y donantes, y por anuncios realizados por las propias empresas. Este tipo de anuncios contienen abundante información, que muchas veces es contradictoria entre sí y de difícil verificación.

Finalmente, se analizó información disponible en Internet de distinto tipo de organizaciones sociales y sindicales, investigaciones periodísticas y académicas que pudieran tener relación con los proyectos específicos, o con el desempeño general de las empresas o el sector bajo análisis, a partir de lo cual se establecieron vínculos e identificaron indicios y pistas para investigar.

En función de la información disponible se buscó en cada caso identificar los siguientes aspectos:

- ✓ Tipo de donante (país(es), agencia(s), etc.).
- ✓ País receptor de la cooperación.
- ✓ Objeto del proyecto de cooperación.
- ✓ Población objetivo: beneficiarios del proyecto de cooperación.
- ✓ Volumen de los fondos aportados por la cooperación
- ✓ Forma de involucramiento y fondos aportados por el sector privado.
- ✓ Caracterización de las empresas involucradas.
- ✓ Consecuencias para el desarrollo local, derechos laborales y derechos humanos, etc.

Todos los valores monetarios se expresan en USd (dólares estadounidenses) para guardar coherencia entre los casos y documentos analizados. Para la conversión se tomaron las tasas de cambio de la fecha indicada en cada caso: fecha de publicación o de desembolso, según corresponda<sup>1</sup>.

#### ***d) Consulta, integración y síntesis:***

Como etapa final, los borradores de cada uno de los casos se socializaron entre miembros de la RSCD, en especial con representantes de organizaciones sindicales provenientes de los países involucrados en el caso. Los comentarios y aportes recibidos se integraron debidamente al estudio que aquí se presenta.

A partir del análisis y síntesis de los cuatro casos seleccionados se han elaborado una serie de conclusiones y sugerencias que se desarrollan en el apartado final de conclusiones.

---

<sup>1</sup> Pueden verificarse en el portal Oanda Currency Converter ([www.onada.com](http://www.onada.com)).

## 4. ESTUDIO DE CASOS SELECCIONADOS

### A. Perú: Los fondos de cooperación al servicio del sector minero transnacional

<b>Donante:</b>
<p>Canadá</p> <p>Canadian International Development Agency (CIDA) / Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD)</p> <p><a href="http://www.acdi-cida.gc.ca">http://www.acdi-cida.gc.ca</a></p>
<b>Programa:</b>
<p>PRODIVCOM – Proyecto para la Diversificación y la Competitividad de las Empresas Asociativas de las Regiones Mineras del Perú</p>
<b>País/lugar donde se ejecuta el proyecto:</b>
<p>Perú.</p> <p>Regiones mineras de Ancash, Cajamarca y la Libertad</p>
<b>Información del Proyecto:</b>
<p>Número: A035352-001</p> <p>Contribución CIDA: \$ 17,400,000 (Usd 16,9 millones a fecha de inicio del proyecto)</p> <p>Agencia de Ejecución: SOCODEVI – Sociedad Canadiense de Cooperación para el Desarrollo Internacional</p> <p>Estado: operativo</p> <p>Marco temporal: 2013 – 2020</p>
<b>Actores involucrados</b>
<p>CIDA</p> <p>SOCODEVI (ONG)</p> <p>Barrick Gold; Rio Tinto; Antamina (Empresas)</p> <p>Gobiernos regionales de Ancash, Cajamarca y La Libertad</p> <p>Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería del Perú</p> <p>Ministerio de Energía y Minas del Perú</p>
<b>Resumen:</b>
<p>Con el pretendido objetivo de promover la diversificación y fortalecimiento de la producción local en las regiones de Ancash, Cajamarca y La Libertad, el proyecto subsidia en un 85% distintas políticas de RSE de las empresas Antamina, Barrick Gold y Rio Tinto.</p> <p>Las tres empresas tienen importante presencia en dichas regiones, en las que enfrentan además diversos conflictos y resistencia por parte de las comunidades locales. Además, el proyecto de CIDA</p>

es gestionado a través de la ONG canadiense SOCODEVI, la cual es financiada, entre otras, por las empresas mineras mencionadas.

La nueva estrategia de la cooperación canadiense en relación con el sector extractivo, centrada en el apoyo a las iniciativas de RSE de las compañías mineras en el exterior, responde al interés general del sector por generar un clima favorable a fin de obtener “licencia social” para sus actividades, así como asegurar la “estabilidad” jurídica y fiscal.

## Introducción

Al igual que ocurrió en muchos otros países de la región, las actividades extractivas a gran escala han tenido un desarrollo notable en el Perú en las últimas dos décadas. De hecho, gran parte del crecimiento económico del Perú en los últimos años ha sido impulsado precisamente por el sector minero, que se ha visto beneficiado por precios internacionales favorables, pero también por marcos regulatorios flexibles, baja carga impositiva, controles insuficientes, corrupción y complicidades en los distintos niveles, inclusive a nivel internacional. (Deneault et al, 2012; Maffei et al., 2015)

A nivel económico, en 2014 la minería representó cerca de 12% del PIB, y alrededor de 50% de las exportaciones (BCRP, 2015). En términos de empleo, la minería generaba en abril de 2015 cerca de 102.000 puestos de trabajo directos, lo que equivale a alrededor de 1% de la fuerza laboral del país (Gobierno de Perú, 2015a). Por otro lado, hay un alto nivel de tercerización: según cifras de 2013 del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 63 por ciento de los trabajadores del sector se encontraban tercerizados. Hay también al menos 400.000 trabajadores en la minería informal (Maffei *et al.*, 2015).

Desde el punto de vista de la salud y seguridad ocupacional, la minería es uno de los sectores más peligrosos. Según la OIT, en todo el mundo la minería emplea 1% de los trabajadores, pero es responsable de 8% de las muertes en el trabajo. En 2014 en el Perú, los trabajadores de la minería sufrieron 6,6% de los accidentes laborales registrados por el MTPE y 29,2% de los accidentes mortales (Maffei *et al.* 2015). Según datos de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), entre 2010 y 2013 han quedado mutilados por accidentes incapacitantes más de un millar de mineros, además de los miles de afectados por enfermedades ocupacionales (FNTMMSP, 2014).

Los trabajadores mineros, tradicionalmente organizados en sindicatos y federaciones con una gran capacidad de movilización en su lucha por mejores condiciones laborales, se convirtieron en actores cada vez menos importantes en el escenario minero peruano por impacto de la violencia de los años ochenta y las políticas neoliberales de los noventa. Sin embargo, en el último año la sindicalización de trabajadores en el sector ha encontrado un repunte incrementándose en un 38%. Los mineros constituyen en la actualidad 14,2% de todos los trabajadores y trabajadoras sindicalizados del Perú (Maffei *et al.* 2015).

Sin menospreciar su aporte al empleo, las exportaciones o la economía del país, es necesario tener en cuenta que, por las características propias de este tipo de explotación, la minería implica una importante ocupación territorial, y la utilización de prácticas altamente destructivas del entorno, muchas veces a largo plazo e incluso irreversibles (Coumans, 2012; Maffei et al, 2015). Precisamente,

los pasivos ambientales<sup>2</sup> de la minería son uno de los principales problemas ambientales del país. En un informe publicado recientemente por la Defensoría del Pueblo, se da cuenta de la existencia de 8.616 pasivos, 4.000 de alto riesgo, lo que es una muestra de la magnitud del daño ocasionado por la actividad. A fecha actual, solo se ha podido identificar a los responsables de 1.000 de los pasivos mineros relevados por la Defensoría del Pueblo (Gobierno de Perú, 2015b).

A su vez, los proyectos mineros generan serias consecuencias sociales en las comunidades cercanas a las áreas de explotación: distorsiones y alza de precios de bienes y servicios, especulación inmobiliaria, aumento del consumo de drogas y alcohol, trata de personas, entre otras. Se produce, además, una competencia por el uso de bienes comunes como el agua o la tierra con otras actividades productivas, la pérdida de identidad, la amenaza a la soberanía alimentaria y al acceso a fuentes de agua segura (Coumans, 2012).

Las organizaciones sindicales peruanas no son ajenas a estas problemáticas. Por el contrario, los trabajadores del sector muestran una gran preocupación por la forma en la que se está desarrollando la minería en el país. Defienden y exigen la protección de sus puestos de trabajo y la mejora de las condiciones laborales, pero al mismo tiempo cuestionan fuertemente el modelo primario exportador y reconocen también que la actividad minera es fuente de importantes conflictos por los riesgos ambientales asociados y por la competencia por recursos estratégicos (Maffei *et al.* 2015).

Todos estos factores subyacen a la decena de conflictos sociales que se producen cada año por la oposición de las comunidades locales al avance de distintos proyectos de explotación minera, en especial minería metalífera a cielo abierto, pero también proyectos relacionados con la explotación hidrocarburífera. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en octubre de 2015 había 214 conflictos sociales, de ellos más de la mitad relacionados con la minería o con la explotación de hidrocarburos (94 y 23 respectivamente). Muchos de estos conflictos han tenido un triste saldo de muertos y heridos, además de la criminalización y judicialización de quienes se oponen. (Gobierno de Perú, 2015c; OLCA, 2015; OCMAL, 2015)

Aún sin considerar los costos sociales y de los pasivos ambientales, que son mayoritariamente asumidos por el Estado y las poblaciones afectadas (Gobierno de Perú, 2015b), el supuesto aporte de la minería a las finanzas públicas a través de regalías e impuestos parecería no ser tal. Por el contrario, diferentes estudios cuantifican los recursos dejados de percibir por el Estado a través de distintos

---

<sup>2</sup>A modo general, los pasivos ambientales constituyen instalaciones mal abandonadas, efluentes, emisiones, restos o residuos producidos por operaciones inactivas o que han cesado sus actividades en el área donde se han producido los impactos y que constituyen un riesgo para el ambiente y la salud.

mecanismos que buscan aprovecharse de resquicios legales o, directamente, por la evasión impositiva. Por ejemplo, la organización LATINDADD (2015) acaba de publicar un informe que indica que entre 1993 y 2013 la elusión fiscal de la minera Yanacocha en Perú ha superado los Usd 1.000 millones. Según datos de Chistian Aid (2009), entre 1996 y 2008 el Estado Peruano ha dejado de percibir por lo menos Usd 1.500 millones por diversos mecanismos de elusión y contabilidades deshonestas. No debe perderse de vista que el margen de beneficio del sector triplica al de la media de la industria a nivel global: 37% para la minería, contra 11% del resto (De Echave, 2014).

Al analizar el sector minero, es importante señalar la capacidad de presión y el poder de penetración que éste ejerce sobre los gobiernos, tanto de los países donde se localizan los proyectos, como en los países donde están registradas sus casas matrices. Por ejemplo en Canadá, donde está inscripto más de 75% de las empresas mineras del mundo (Gobierno de Canadá, 2009), diputados que han presentado Proyectos de Ley tendientes a aumentar la regulación del sector sufrieron amenazas y sus proyectos ni siquiera se trataron<sup>3</sup>. Los conflictos de intereses y la penetración en el poder político son evidentes. Siempre en ese país, varios ex Primeros Ministros y Ministros ocupan al retirarse cargos en los Directorios de algunas de las mayores empresas mineras (Deneault, 2012).

Las políticas de cooperación de dichos países también sufren este tipo de penetración. Por ejemplo, un alto ejecutivo de la minera Rio Tinto Alcan fue uno de los cinco miembros del comité asesor para la reestructuración de la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional CIDA en 2013 (Payne, 2013). Las agencias de cooperación reciben las presiones del sector y llegan a actuar ellas mismas en favor de las compañías mineras<sup>4</sup>. En concreto, financian con fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) distintas actividades que tienen por objetivo general crear un clima favorable a las empresas mineras registradas en sus países. Se pueden ver proyectos de la cooperación Canadiense o Australiana para “adecuar” el marco regulatorio<sup>5</sup>, para la construcción de infraestructura o desarrollos

---

<sup>3</sup>Aunque muy tímidos, hubo distintos Proyectos de Ley que, entre otras cosas, pretendían condicionar las ayudas públicas a la minería (incluidos los fondos de CIDA) al cumplimiento de ciertos criterios éticos de respeto a derechos humanos y ambientales. Estos proyectos no fueron aprobados, algunos ni siquiera llegaron a instancia de debate, y sus autores sufrieron amenazas por parte de las empresas mineras. (Deneault et al, 2012)

<sup>4</sup>Entre otras iniciativas financiadas con fondos de la cooperación canadiense, en mayo de 2013 se fundó el Instituto Canadiense Internacional para las Industrias Extractivas y el Desarrollo (CIIEID, en inglés). Durante una presentación realizada ante la Asociación Minera de Canadá pocas semanas después de su fundación, el ex ministro de Desarrollo Internacional de Canadá aseguró a los representantes de las empresas mineras que el Instituto “será su mayor y mejor embajador”. ([www.miningwatch.org](http://www.miningwatch.org))

<sup>5</sup>Son varios los proyectos que se refieren a “mejoras” en el marco regulatorio del sector extractivo. Una simple recorrida por distintos sitios de internet y periódicos permite apreciar que, en la práctica, en la mayoría de los países de la región persisten, o aún empeoran, la debilidad de los controles, los beneficios fiscales, la conflictividad social, y la recurrencia de desastres ambientales relacionados con la minería.

tecnológicos imprescindibles para la viabilidad de ciertos proyectos<sup>6</sup>, para la “formación” de profesionales y funcionarios públicos (a veces dictada por las empresas)<sup>7</sup>, eventos que buscan “limpiar” la imagen, brindan publicidad y contactos<sup>8</sup>, etc.

---

<sup>6</sup>En Colombia, la CIDA financió la instalación de un sistema de relevamiento de datos geológicos por satélite, construido y gestionado por la empresa canadiense Radsat International Inc. y la agencia espacial de Canadá, cuyos servicios solo pueden contratar las grandes mineras transnacionales (Delanaut, 2012)

<sup>7</sup>Algunos de los cursos que hacen parte de la formación provista por el IM4DC (financiado por AusAID) son dictados por las empresas mineras. En la evaluación que la Agencia hace sobre el programa, se señala que debe ampliarse la participación de estas empresas en todas las actividades de formación, pero también en las etapas de diseño y planificación del programa de la AusAID. (Gobierno de Australia, 2014)

<sup>8</sup>La agencia canadiense CIDA financió en 2009 un evento sobre minería durante una reunión de la OEA en la que la empresa Barrick Gold expuso a los gobiernos de la región sobre sus políticas de RSE (OLCA - <http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama419.html>). En 2013, AusAID financió una Conferencia en Sidney en la que participaron 600 personas, entre las que se encontraban representantes de las empresas mineras y funcionarios de 69 países de África, América Latina y Asia. (Gobierno de Australia, 2014)



### La cooperación canadiense y la minería en el Perú

El caso de la cooperación de Canadá es especialmente interesante por el papel que juega el país en la operación de la minería transnacional. Muchos autores consideran a Canadá como un paraíso fiscal y judicial por la flexibilidad del marco regulatorio y las garantías de protección que el país ofrece a los grandes inversores mineros, aún para sus inversiones en el exterior (Deneault et al, 2012).

Perú es uno de los países con fuerte presencia de mineras canadienses. Según informaciones periodísticas, en 2014 operaban en el país 64 empresas mineras registradas en Canadá<sup>9</sup>. A su vez, Canadá ocupa el décimo lugar entre los países con proyectos de cooperación en el Perú. Según los datos del Departamento de Asuntos Internacionales, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD por su sigla en inglés), la cooperación de ese país ha implementado desde 1999 más de 100 proyectos de “cooperación al desarrollo” que involucraron a Perú, 34 de los cuales fueron de alcance nacional y el resto de alcance regional. Asimismo, de los proyectos desarrollados exclusivamente en Perú, el mayor número fue dirigido a las industrias extractivas, y al menos 10 están relacionados específicamente con la minería o dirigido a comunidades donde se desarrollan proyectos mineros<sup>10</sup>.

Uno de los proyectos que bien vale la pena mencionar es el **PERCAN (Proyecto Perú – Canadá para la Reforma de los Recursos Minerales**, o en inglés “*Peru-Canada Mineral Resources Reform Project*”) Este proyecto contó con un presupuesto de cerca de Usd 14 millones y se extendió de 2002 hasta 2012. Según se declara en la página Web de CIDA, el proyecto tenía por objetivo brindar asistencia técnica al MINEM para la reforma del marco regulatorio relativo al sector minero<sup>11</sup>.

A pesar de que la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (CIDA, en inglés)<sup>12</sup> considera sus resultados positivos, en la práctica se observa en el Perú un aumento de la conflictividad social asociada a la actividad minera, y una reforma a la baja de la regulación: disminución de multas ambientales, reducción de competencias del Órgano de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), reducción de los tiempos para analizar Estudios de Impacto Ambiental (EIA), disminución de responsabilidad de la patronal en temas de salud y seguridad ocupacional, condonación de

---

<sup>9</sup> <http://gestion.pe/empresas/mineras-canadienses-operando-peru-se-redujo-93-64-al-cierre-2014-2132043>

<sup>10</sup> <http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/fWebCSAZEn?ReadForm&idx=00&CC=PE> [8 de noviembre de 2015]

<sup>11</sup> <http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/projEn/A031548001> [Revisado 8 de noviembre de 2015]

<sup>12</sup> En 2013 CIDA fue absorbida por el Departamento de Asuntos Internacionales, Comercio y Desarrollo (DFTAD). Sin embargo, en este documento se continuará haciendo referencia a CIDA cada vez que se trate de proyectos y fondos de la Ayuda de Cooperación al Desarrollo (AOD)

impuestos a grandes empresas, garantías de estabilidad fiscal para la gran minería, entre otras ventajas para el sector extractivo<sup>13</sup>. (Gobierno de Perú, 2015b; Maffei et al., 2015)

Como se puede verificar en la página Web del proyecto PERCAN<sup>14</sup>, el responsable por la ejecución del proyecto (“*executing agent*”) fue el consorcio canadiense Roche Ltd.<sup>15</sup>, una de las mayores compañías de ingeniería y construcción de Canadá, con operaciones en más de 55 países y entre cuyos miembros se encuentran empresas del gas y del petróleo, y proveedoras de servicios mineros<sup>16</sup>.

Resulta evidente la incompatibilidad y el conflicto de intereses. Es absolutamente cuestionable y contrario a la ética que un proyecto de cooperación que tiene por objetivo fortalecer el marco regulatorio y los controles sobre el sector minero sea gestionado por las mismas empresas que podrían verse afectadas por normas y controles más rigurosos.

---

<sup>13</sup>Muchos de estos cambios se incluyeron en el paquete de reformas económicas (“Paquetazo”) aprobado por el Gobierno de Perú en julio de 2014, el cual recibió fuerte rechazo por parte de las organizaciones sociales y sindicales, incluidos los trabajadores y trabajadoras del sector minero, e inclusive por la órganos públicos (Gobierno de Perú, 2015b; Maffei et al, 2015).

<sup>14</sup> <http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/projEn/A031548001> [Revisado 8 de noviembre de 2015]

<sup>15</sup> <http://www.roche.ca/en/> [Revisado 8 de noviembre de 2015]

<sup>16</sup> <http://www.roche.ca/en/about-us/#roche-membres> [Revisado: 8 de noviembre de 2015]

### *El uso de fondos de cooperación para facilitar la “licencia social”*

En 2009, el Gobierno de Canadá anunció una nueva estrategia internacional para el sector extractivo bajo el título **“Construyendo la ventaja canadiense: Una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector Extractivo Internacional Canadiense”**. Este hecho marca una reorientación de la política de cooperación de Canadá, profundizando aún más su foco hacia los propios intereses comerciales del país, en particular los de las grandes empresas mineras canadienses, por sobre objetivos como el combate a la pobreza. En palabras del ex-Ministro de Cooperación Internacional, Julián Fantino, *“más que limitarse al combate a la pobreza, la agencia de cooperación internacional de Canadá debe jugar un papel activo en la promoción de los intereses económicos del país en el exterior”* (Mackrael, 2012b)

La nueva estrategia da mandato a la CIDA para trabajar en alianza con el sector minero en sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) (Brown, 2014; Coumans, 2012). Algunos autores señalan que esta estrategia responde a la presión de las compañías mineras para obtener mayor apoyo del gobierno y la CIDA frente a la creciente resistencia de las poblaciones locales (Coumans, 2012). Según se cita en diversos artículos, las ONG canadienses sostienen en concreto que la Cámara de Comercio Canadiense y la empresa Barrick Gold han estado detrás de la nueva estrategia (Saunders, 2009).

Desde entonces, se multiplican los proyectos con distintas empresas mineras operando en Perú y en otros países, a veces con la intermediación de grandes ONG canadienses, algunas con vínculos directos con las compañías mineras. Algunos de estos proyectos se presentan como “proyectos piloto”, lo que podría llevar a pensar que son iniciativas que esperan replicarse y ampliarse en el futuro como una vía de “desvío” de los fondos de cooperación (Brown, 2014).

### ¿Desarrollo local o publicidad subsidiada?

Una revisión de la página Web de la DFATD<sup>17</sup> permite ver que de 18 proyectos actualmente operativos, al menos 7 están relacionados con temas de minería o dirigidos específicamente a comunidades mineras. Una revisión en particular de cada proyecto permite advertir las vinculaciones directas de muchos de ellos con las grandes compañías mineras registradas en Canadá.

Tomando por caso el más reciente de todos, el “*Proyecto de Diversificación y Competitividad de las Empresas Asociativas de las Regiones Mineras del Perú – PROVIDCOM*”<sup>18</sup>, se puede ver claramente esta articulación.

Este proyecto fue iniciado en marzo de 2013 con una extensión hasta 2020. Se desarrolla en varias regiones con fuerte presencia de la gran minería transnacional: Ancash, Cajamarca y La Libertad.

El objetivo general declarado por la DFATD es contribuir a la diversificación productiva de estas regiones, en particular en los sectores agropecuario y forestal, y fortalecer a las cooperativas de producción mejorando su competitividad y facilitando el acceso a los mercados nacionales e internacionales.

La entidad responsable por la ejecución del proyecto es la ONG canadiense SOCODEVI (Sociedad Canadiense de Cooperación para el Desarrollo Internacional), una organización que es ejecutora también de proyectos financiados por CIDA en otros países, y entre cuyos financiadores y patrocinadores se encuentran gigantes mineras como la Barrick Gold, Rio Tinto y Antamina Mining; organismos como el BID y el Banco Mundial; así como agencias de cooperación de otros países<sup>19</sup>.

Según anuncia la Embajada de Canadá en el Perú en su página Web, “*gracias al aporte de las compañías Barrick Gold, Antamina y Rio Tinto el proyecto [PRODIVCOM] ha logrado totalizar Usd 20 millones*”<sup>20</sup>. Este argumento intenta justificar las alianzas con el sector privado desde la supuesta movilización de fondos adicionales (“apalancamiento” o “*leverage*” en inglés), sin embargo, de la información oficial disponible en la página Web del DFATD se desprende que casi Usd 17 millones (85%) son aportados por CIDA. Según la información de Barrick, la empresa aporta Usd 1,7

---

<sup>17</sup> <http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/fWebCSAZEn?ReadForm&idx=00&CC=PE> . Ver también <http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCSAZEn/48300A9DCF0EA77585257B18003B2858> [Revisado: 10 de noviembre de 2015]

<sup>18</sup> <http://prodivcom.socodevi.org/proyecto/estrategia/> [Revisado: 10 de noviembre de 2015]

<sup>19</sup> <http://socodevi.org>

<sup>20</sup> [http://www.canadainternational.gc.ca/peru-perou/highlights-faits/2014/can\\_comp\\_econo.aspx?lang=eng](http://www.canadainternational.gc.ca/peru-perou/highlights-faits/2014/can_comp_econo.aspx?lang=eng) [Revisado: 11 de noviembre de 2015]

millones<sup>21</sup>, lo que da a suponer que las otras dos compañías aportan lo restante. Aunque estas cifras son algo diferentes a las que se anuncian en la Web del Proyecto, la participación relativa de CIDA en relación con el aporte de las empresas es muy similar<sup>22</sup>.

La página oficial del PRODIVCOM reconoce asimismo que las tres regiones en las que se está implementando el proyecto son regiones en las que estas tres compañías están operando. Son, casualmente, regiones en las que hay un alto nivel de conflictividad social en relación con la minería (Gobierno de Perú, 2015b).

Por ejemplo, en Quiruvilca (La Libertad), cientos de trabajadores tercerizados de la mina que la Barrick Gold opera en dicha localidad iniciaron un paro de actividades el 29 de mayo de 2015 y bloquearon la carretera de acceso a la minera exigiendo el respeto de sus derechos laborales, en particular los acuerdos de un Acta suscrita luego de una paralización similar en el 2013. El bloqueo, con participación también de la comunidad local, persistió hasta mediados de junio de 2015, y acabó finalmente con enfrentamientos y toma de rehenes, y la represión de la Policía Nacional, que fue movilizada para garantizar el acceso a las instalaciones de la Barrick<sup>23</sup>.

Cabe señalar que estas mineras enfrentan graves denuncias en distintos lugares del mundo. Solo como ejemplo, la Barrick Gold es considerada una de las compañías más controvertidas del planeta. La organización RepRisk, dedicada a la evaluación del desempeño ambiental y social de diversos sectores la coloca en reiteradas ocasiones dentro de las 10 empresas más cuestionadas del mundo (RepRisk, 2009 y 2011).

En 2014, año del lanzamiento del proyecto, se multiplicaban los anuncios en medios y páginas de Internet de los actores involucrados. A la fecha de cierre de este estudio se habían realizado estudios de base y se había anunciado la creación de cinco cooperativas de pequeños productores agropecuarios y forestales en Ancash. Sin embargo, el sitio Web oficial del proyecto no presenta nuevas informaciones desde junio de 2014. Las páginas Web de CIDA y de SOCODEVI tampoco muestran resultados del proyecto. Es interesante señalar también que las metas del proyecto difieren

---

<sup>21</sup> <http://barrickbeyondborders.com/people/2014/02/barrick-breaks-new-ground-in-peru-agro-forestry-with-canadian-partners/> Cambio calculado a la fecha de la publicación (febrero 2014) [Revisado: 11 de noviembre de 2015]

<sup>22</sup>Según se cita en la página oficial del proyecto, el presupuesto total del PRODIVCOM es de más de \$23 millones de dólares canadienses, de los cuales CIDA aporta \$16.9 millones de dólares canadienses. La otra parte del financiamiento proviene de empresas mineras que operan en las 3 regiones “beneficiadas” por el proyecto: Barrick Gold, Antamina y Rio Tinto. <http://prodivcom.socodevi.org/proyecto/financiadores/> [Revisado: 11 de noviembre de 2015]

<sup>23</sup> <http://trujilloinforma.com/la-libertad/dialogo-con-trabajadores-de-contratas-de-barrick-evito-que-bloquearan-la-carretera-al-interior/> y <http://larepublica.pe/imprensa/sociedad/7413-quince-heridos-deja-enfrentamiento-entre-policias-y-trabajadores-en-quiruvilca> [Revisado: 10 de noviembre de 2015]

mucho entre la documentación oficial del proyecto y las declaradas en anuncios públicos de la Embajada de Canadá en Perú, SOCODEVI y las empresas involucradas. Por ejemplo, la documentación oficial del proyecto establece como meta beneficiar directamente a 3.000 pequeños productores agropecuarios y forestales; los anuncios públicos amplifican notablemente estas cifras, y hablan de 8.000 beneficiarios directos y 24.000 indirectos. No es menor el dato de que este tipo de anuncios rimbombantes se hacen en general en páginas Web locales (en castellano) y periódicos locales del país receptor de la cooperación, es mucho menor la visibilidad en sitios o medios canadienses.

De todo lo anterior, quedan en evidencia los verdaderos beneficiarios de este proyecto subvencionado en un 85% por la cooperación canadiense o, lo que es lo mismo, por el dinero de los contribuyentes canadienses. Bajo el loable pretendido objetivo de contribuir con la diversificación y el desarrollo de cooperativas locales de producción, algo absolutamente necesario en el Perú, la agencia canadiense de cooperación está en la práctica subsidiando estrategias “publicitarias” por medio de la financiación de políticas voluntarias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), contribuyendo a “blanquear” la imagen y legitimar las actividades de compañías fuertemente cuestionadas y resistidas en todo el mundo.

Está contribuyendo, además, a mejorar la competitividad de las grandes mineras en varias formas:

- ✓ Promoviendo un clima favorable hacia las mineras por parte de autoridades regionales y locales que ven en estos proyectos una forma de atender demandas sociales largamente postergadas;
- ✓ Contribuyendo a bajar los niveles de conflictividad local a fin de obtener la ansiada “licencia social” para sus operaciones;
- ✓ Induciendo a las comunidades locales a percibir a las compañías mineras como agentes filantrópicos, reduciendo la atención sobre sus prácticas y rendición de cuentas;
- ✓ Brindando protección a las compañías mineras frente a eventuales cambios en la normativa, aumentos de tasas, regalías, etc.

La verdadera intención de este tipo de cooperación fue claramente señalada por las compañías del sector en la época en que se reformulaba la estrategia de cooperación de Canadá. Según cita el periódico de Ottawa *Globe and Mail*, Pierre Gratton, presidente de la Asociación Minera de Canadá explicó en una entrevista que este tipo de proyectos “*facilita a las compañías mineras la venta de sus proyectos, a veces controvertidos, a las poblaciones locales*” (Leblanc 2012). En el mismo sentido se expresó Julián Fantino, el Ministro de Cooperación Internacional de la época, “*El trabajo*

*de CIDA con las empresas mineras les ayudará a mejorar su competitividad a nivel internacional”*  
(Mackrael 2012a).

## Conclusiones

Desde el gobierno canadiense se busca justificar este tipo de proyectos aduciendo que éstos permiten movilizar o apalancar recursos del sector privado. Sin embargo, como se vio al analizar este caso, muchas veces es la parte gubernamental la que aporta el grueso de los recursos.

También se intenta presentar al sector como un agente clave y motor del desarrollo para los países receptores de la ayuda. Hay sin embargo profusa información y conocimiento construido en torno a los males que trae aparejados consigo este tipo de proyectos, los que muchas veces imposibilitan un verdadero desarrollo a largo plazo y dejan como herencia graves consecuencias sociales y ambientales.

El principal beneficio para las empresas sería la legitimidad y protección que les brindaría la entrada de la mano de CIDA. Las compañías mineras se convierten así en entidades “filantrópicas”, lo que facilitaría la elusión de responsabilidades por sus prácticas dañinas o deshonestas, o evitar aumentos de tasas o regalías. Comunidades en zonas de explotación minera, pueden hacer la lectura de que los proyectos de explotación vienen asociados a fondos oficiales canadienses que permitirán hacer mejoras de infraestructura, en educación, salud, muchas veces déficits sociales de larga data.

Finalmente, sería conveniente realizar un estudio específico sobre el papel de las agencias de cooperación en relación con la minería, ya no solo de Canadá sino también de otros países con fuerte presencia minera, como Australia y su Iniciativa “Minería para el Desarrollo” (AMDI).



### *Notas sobre metodología*

La decisión de analizar el tema minería se tomó de manera conjunta con miembros de la RSCD de América Latina basándose en diversos factores: la altísima conflictividad social en torno a este tema, los cuestionamientos en cuanto su verdadero aporte al empleo y a las economías de los países en donde operan, la fuerte presencia de mineras trasnacionales en la región, en particular, de mineras registradas en Canadá.

Aunque en una primera mirada no resultaba tan claro el papel de las agencias de cooperación, al profundizar se encontraron distintas posibles líneas de investigación, en especial proyectos de cooperación de Australia y de Canadá. En función del volumen de fondos y la cantidad de proyectos ejecutados o en ejecución, se resolvió enfocar el análisis en la cooperación canadiense en Perú.

Se revisó un total de 110 proyectos de la cooperación canadiense en Perú. Para el análisis de caso, se resolvió profundizar en el proyecto PRODIVCOM por tratarse del más reciente, desarrollarse en regiones mineras y estar el sector privado directamente involucrado.

Se revisó información oficial disponible en la Página de internet del DFATD y de las distintas entidades peruanas y canadienses involucradas en el proyecto. Se revisaron también sitios de ONG y periódicos canadienses y peruanos. En paralelo, se realizaron consultas con especialistas, referentes de organizaciones no gubernamentales y de movimientos de resistencia, de ambos países.

**B. Haití: El fracaso de la cooperación internacional. Beneficios para las corporaciones, y vulneración de derechos para el pueblo haitiano**

<b>Donantes:</b>
<b>BID</b> (Banco Interamericano de Desarrollo) - <a href="http://www.iadb.org">www.iadb.org</a>
<b>USAID</b> <a href="http://www.usaid.gov">www.usaid.gov</a>
<b>Receptor / localización:</b>
Haití, Corredor Norte-Nordeste (Caracol y zonas aledañas)
<b>Proyectos:</b>
<b>BID:</b> Proyectos para la construcción del Parque Industrial Caracol (PIC)
<b>HA-L1101:</b> Programa de Infraestructura IV, valor total USd 41 millones, aprobado en diciembre 2015
<b>Antecedentes:</b> <b>HA-L1076</b> (aprobado 2012, USd 50 millones, 84% desembolsado); <b>HA-L1081</b> (aprobado 2013, USd 40,5 millones 85% desembolsado); <b>HA-L1091</b> (aprobado 2014, USd 55 millones 25% desembolsado)
<b>USAID:</b>
Planta de generación eléctrica para el PIC – EN EJECUCIÓN
Plan de viviendas para trabajadores del PIC - RECORTADO
Construcción de nuevo Puerto para el PIC – CANCELADO / REFORMULADO
<b>Actores involucrados</b>
<b>BID</b> – Banco Interamericano de Desarrollo
<b>USAID</b> – Agencia de cooperación de los EEUU
<b>MEF</b> - Ministerio de Economía y Finanzas de Haití
<b>SONAPI</b> - Sociedad Nacional de Parques Industriales
<b>S&amp;H Global</b> (maquila textil)
<b>Resumen:</b>
A raíz del trágico terremoto de Haití (2010), la comunidad internacional comprometió miles de millones de dólares estadounidenses para asistencia humanitaria, ayuda al desarrollo y reconstrucción. Pasados los años, el nivel de ejecución de los fondos ha sido bajo, y las metas no se han alcanzado: muchos proyectos habitacionales y de infraestructura se recortaron o cancelaron, y otros presentan deficiencias constructivas; hubo problemas de diseño, planificación, sobrecostos y falta de control.

Además, la inmensa mayoría de los recursos se canalizó a través de actores privados, en general extranjeros, muchas veces sin experiencia, con poco conocimiento del país, y sin ninguna articulación con las instituciones, gobiernos o actores locales.

Uno de los proyectos de cooperación internacional más publicitado ha sido la construcción del **Parque Industrial Caracol (PIC)**, una zona exenta de impuestos y destinada principalmente a la instalación de la **maquila S&H Global**, la cual a su vez se beneficia del tratamiento diferenciado del que gozan en EEUU las importaciones textiles provenientes de Haití.

El Parque, que se utiliza desde 2012, es construido con fondos no reembolsables aportados por el BID. Los fondos de la USAID se destinan a proyectos de infraestructura necesarios para la operación del PIC (planta de generación de energía, viviendas y obras portuarias). El proyecto en general se ha diseñado en función de las necesidades y del plan de expansión de S&H Global.

El objetivo declarado es promover el desarrollo local por medio de la generación de decenas de miles de puestos de trabajo. A fecha de hoy, la generación de empleo está por debajo de la expectativa y las condiciones laborales distan mucho de lo que podría considerarse un trabajo decente: los salarios no llegan a cubrir el 25% de las necesidades más elementales; se suceden las denuncias de acoso, persecución y maltrato; y las condiciones de higiene y seguridad son precarias.

Claramente, este tipo de proyectos no solo benefician a empresas privadas que obtienen lucros exorbitantes, sino que no promueven en absoluto el pretendido desarrollo local, mucho menos un desarrollo sustentable inclusivo. En particular, la precariedad de las condiciones laborales es uno de los factores clave para maximizar los márgenes de ganancia de estas empresas.

## Introducción

Haití tiene una población cercana a los 11 millones de habitantes, la gran mayoría viviendo en el área de la capital, Puerto Príncipe. Según datos del BID, en 2012 el desempleo rondaba el 40% y la pobreza 59% (BID, 2015a). En un país donde más del 50% de los alimentos son importados (IPS, 2010), cerca de 3 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria (CNSA, 2013).

La fuerza de trabajo activa llega a algo más de 4 millones de personas, repartidas entre el sector agropecuario (66%), el área de servicios (25%), y la industria manufacturera (9%). Del total de trabajadores, según los datos del BID más de 70% son informales (BID, 2015a). Además, 60% de los trabajadores ganan menos que el salario mínimo (CEPR, 2015).

En 2014, las importaciones llegaron a USd 3.400 millones, y las exportaciones fueron de USd 956 millones, de las cuales 73% tuvieron como destino EEUU. Con 90%, el mayor rubro de exportación corresponde a la industria textil (BID, 2015a). Las remesas son un ingreso muy importante para los hogares haitianos, desde 2008 éstas han superado los USd 1.300 millones anuales. Se estima que las remesas representan un 30% del ingreso familiar, y que su principal destino es la educación de los hijos<sup>24</sup>(Herbst, 2013).

Todos estos factores hacen de Haití uno de los países más empobrecidos del mundo, y uno de los principales receptores de cooperación internacional. A pesar de todas las iniciativas y proyectos de cooperación de gobiernos, agencias multilaterales, ONG y entidades privadas, el país no solo no ha logrado resolver los importantes déficits sociales sino que se han profundizado la dependencia externa y el debilitamiento del Estado (Equal Times, 2014).

---

<sup>24</sup>98% de las escuelas del país son privadas (Herbst, 2013)

### *Los ciclos nada virtuosos de la cooperación internacional con Haití*

Desde la caída del régimen Duvalier a mediados de los años 80, Haití ha recibido importantes flujos de cooperación internacional. Además, el país lleva más de 20 años de intervención de las Naciones Unidas a través de “misiones de paz” que se han sucedido sin interrupción desde 1993. La intervención actual de la MINUSTAH tiene, a diferencia de misiones anteriores, un fuerte protagonismo de países de América Latina, como Argentina, Brasil y Chile.

Aunque el volumen de los fondos de asistencia al desarrollo que Haití ha recibido en las últimas dos décadas fue muy significativo, las relaciones de cooperación han tenido un patrón cíclico que ha respondido al ejercicio de lo que algunos autores llaman, una “diplomacia coercitiva”: grandes desembolsos de dinero asociados a fuertes condicionalidades, seguidas de recortes importantes y hasta embargos comerciales que han supuesto el bloqueo o cancelación de proyectos de cooperación, y la imposición de nuevas condicionalidades<sup>25</sup>. Este patrón cíclico ha ido sofocando a la economía haitiana, generando cada vez una mayor dependencia de los recursos externos, el quiebre de los circuitos comerciales y productivos locales, el agravamiento progresivo de la situación social, y, por tanto, la imposibilidad de cualquier tipo de desarrollo autónomo (Gotson, 2013; Herbst, 2013).

A partir de 2004 se intentó lograr algo de estabilidad con el establecimiento de un “Marco de Cooperación Interina”, que declaraba como objetivo el contribuir con la gobernabilidad y la realización de las elecciones de 2006. Esta etapa se caracterizó también por una mayor presencia de actores regionales y flujos de cooperación Sur-Sur. Con todo, la AOD recibida por Haití era menor a lo considerado necesario por los estudios de organismos multilaterales. Además, se producía en paralelo una disminución de la inversión directa y una constante y creciente presión por el pago de la deuda externa (Herbst, 2013, Gobierno de Haití, 2009).

Citando un estudio del PNUD de 2006, Herbst señala que las formas que había ido adoptando la AOD tuvieron algunas características negativas que, según algunos autores, perduran hasta hoy. Entre otras: gran parte de la AOD había sido ligada (condicionada a las adquisiciones o contrataciones con empresas del país donante); los informes de monitoreo y evaluación fueron confidenciales, resultando

---

<sup>25</sup> Por ejemplo, entre 1990 y 2000 el país recibió cerca de USd 1.200 millones de AOD, pero los flujos no fueron constantes sino que tuvieron gran variabilidad por diversos factores. Entre 1991 y 1994, un embargo comercial limitó o paralizó la recepción de ayuda. La salida de este embargo impuso fuertes condiciones para acceder a nuevos fondos de cooperación, entre otros, la prohibición por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de distribuir fertilizantes y equipamiento para pequeños agricultores, lo que acabó destruyendo la producción agrícola local y propiciando la dependencia de alimentos importados, que continúa hasta hoy. A un nuevo ciclo de asistencia (1995-2000) que solo en 1995 movilizó más de USd 500 millones de AOD, le siguió un nuevo embargo comercial (2001-2004) que redujo al mínimo el apoyo de la comunidad internacional. Por ejemplo, EEUU vetó la ejecución de USd 400 millones del BID para programas de salud, educación y suministro de agua.

difícil evaluar, corregir y coordinar los esfuerzos, lo que podría haber permitido una mayor eficacia de la ayuda (Herbst 2013).

Otros autores mencionan también la casi nula participación de los gobiernos y actores locales en la determinación de las necesidades, planificación y ejecución. Fueron habituales los proyectos implantados desde fuera, con muy poco conocimiento de la realidad local, y prácticamente sin ningún nivel de apropiación por parte de las comunidades que se suponía eran las beneficiarias (Herbst, 2013).

Con niveles de pobreza superiores al 55%, hambre o desnutrición crónica de 40%, y más de 54% de desempleo, el 12 de enero de 2010 el país sufrió un terremoto de 7 grados en la escala de Richter. Las consecuencias fueron devastadoras: más de 230.000 muertos y 300.000 heridos; hospitales, establecimientos educativos, edificios públicos, sistemas de transporte, distribución y suministro, y unas 200.000 viviendas quedaron destruidos; un millón y medio de personas debieron desplazarse a campamentos de “refugio temporario”, y 20% de los trabajadores y trabajadoras haitianos perdieron su trabajo o medios de vida. Tres meses después, una epidemia de cólera causó la muerte de por lo menos 8.000 personas<sup>26</sup> (CEPR, 2015; CSA *et al.*, 2010; HGW, 2012).

---

<sup>26</sup> Son múltiples las denuncias sobre el papel de la ONU, tanto por la responsabilidad en el origen de la epidemia como por la implementación de las medidas sanitarias. Más información en <http://www.equaltimes.org/brote-de-colera-en-haiti-es-hora>

### *La solidaridad internacional para la emergencia humanitaria y la reconstrucción*

Frente a estos acontecimientos, la comunidad internacional se conmovió y convocó con urgencia a la “Conferencia Internacional de Donantes por un nuevo futuro para Haití”, en Nueva York, el 31 de marzo de 2010, en la cual los países y distintos organismos y programas multilaterales comprometieron fondos de asistencia (ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo) por USd 5.300 millones en dos años, los cuales serían gestionados por una “Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití” (IHRC, por su sigla en inglés), liderada por el ya entonces ex - Presidente Bill Clinton y el Presidente de Haití Michel Martelly. Por su parte, las Naciones Unidas comprometieron USd 13.340 millones hasta 2020(HGW, 2011a; ISF, 2011; NBCNews, 2015).

En oportunidad de la Conferencia, el movimiento sindical internacional hacía un llamado a todos los donantes para que en el proceso de ayuda y reconstrucción se “*dé prioridad a los derechos de los trabajadores, la protección social y la creación de trabajo decente*”, e insistía en la necesidad de “*consultar y cooperar con las organizaciones de trabajadores al momento de reanimar las economías y fuentes de trabajo locales y nacionales*”. Lanzaba también una campaña solidaria, y convocaba a una cumbre internacional sindical para diseñar un plan de trabajo para la reconstrucción y el desarrollo de Haití (CSA *et al.*, 2010).

Un año después de la Conferencia de Nueva York, la comunidad internacional había desembolsado apenas 20% de los USd 5.300 comprometidos; y para 2012 las Naciones Unidas habían desembolsado menos del 50% (HGW, 2011a; ISF, 2011; NBCNews, 2015).

Un primer dato revelador de cómo ha sido el funcionamiento de los fondos de cooperación, es que del total de la asistencia para atender la urgencia, se estima que solo el 1% fue a manos del gobierno; asimismo, para el caso de los fondos de reconstrucción, solo 7% de la asistencia bilateral y 23% de la multilateral se canalizaron a través del gobierno (Gotson, 2013).

EL grueso del dinero de la cooperación ha ido a manos privadas, en particular de entidades extranjeras. A modo de ejemplo, la USAID informó en 2012 que de los más de USd 700 millones gastados entre 2010 y 2011 en proyectos humanitarios en Haití, solo USd 9,5 millones (1,35%) han ido a manos de actores haitianos. De los USd 400 millones en contratos, solo 0,02% fueron otorgados

a firmas haitianas, en tanto que 77,5% fueron concedidos a firmas registradas en el cordón industrial de Washington<sup>27</sup>, y el 22,5% restante a otras firmas<sup>28</sup> (CEPR, 2012; Equal Times, 2014).

Artículos y denuncias de los primeros años luego del terremoto hablan de la presencia masiva de inversores externos buscando hacer negocios con los proyectos de reconstrucción, beneficiándose de los flujos de dinero que se habían comprometido, y de algunas “ventajas comparativas”, como el bajísimo costo de la mano de obra, los subsidios a las inversiones, el régimen de exención impositiva garantizado por 15 años, y las leyes de tratamiento preferencial de EEUU<sup>29</sup> (IPS, 2011a y 2011b).

El argumento generalizado para justificar la canalización del dinero a través de entidades no estatales ha sido la falta de capacidad, alta corrupción e ineficiencia de las instituciones públicas (Equal Times, 2014; Public Integrity, 2012). Precisamente, algunos autores señalan que en los programas de asistencia al desarrollo de los últimos 20 años ha habido una marcada falta de interés por el fortalecimiento de las estructuras estatales, la implementación de políticas públicas o el empoderamiento local, lo que ha perpetuado un círculo nada virtuoso de dependencia y sumisión<sup>30</sup> (Herbst, 2013).

Unos párrafos aparte merecen las numerosas y muy loables iniciativas de muchas entidades y ONG internacionales que han intentado contribuir para resolver cuestiones básicas y urgentes para la calidad de vida y subsistencia de los más necesitados. Sin embargo, la desconfianza en las capacidades gubernamentales, justificadas muchas veces por los flagrantes casos de corrupción e inestabilidad política, han hecho que muchos de estos esfuerzos se hayan dado de manera desarticulada sin una verdadera apropiación por parte de los actores locales, por lo que han perdido eficacia y, en algunos casos, pueden incluso haber debilitado las propias capacidades organizativas y de respuesta del pueblo haitiano. Varias organizaciones señalan que muchas entidades privadas y ONG actuaron de manera paralela y no articulada con el Estado, debilitando aún más a las instituciones e incluso dañando a la economía local al competir con empresas y proveedores locales que contaban con suficiente capacidad operativa como para brindar bienes y servicios de manera eficiente (Equal Times, 2014; Herbst, 2013, Public Integrity, 2014).

---

<sup>27</sup>Firmas con domicilio en el “Beltway”, que incluye Maryland, Virginia y Washington

<sup>28</sup> Aunque esto ha sido reconocido por la USAID, la propuesta que señalan algunos artículos periodísticos de que en los próximos años 17% de la AOD vaya a manos de actores locales parece poco ambiciosa (NBCNews, 2015).

<sup>29</sup> Leyes HOPE I (2007), HOPE II (2008), y HELP (2010), que garantizan un tratamiento diferenciado a las importaciones textiles de Haití hasta 2020. Está actualmente en tratamiento en el Congreso de EEUU una ley que establecería una prórroga hasta 2025. <https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hr1891>.

<sup>30</sup> Según el análisis de Herbst (2013), solo 4% de los fondos de cooperación de los organismos multilaterales entre 2005 y 2008 se destinaron a fortalecimiento institucional, el más bajo de todos los rubros.



### *Las múltiples irregularidades y denuncias en el proceso de “Reconstrucción”*

Desde entonces, se acumulan las denuncias por mal uso, desvío u orientación discrecional de los fondos de cooperación. En los primeros años, muchas organizaciones haitianas e internacionales se preguntan “¿Dónde está el dinero para Haití?”, en referencia a los bajísimos niveles de ejecución y la pobreza de los resultados. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta no es fácil de responder. Según algunos autores la información es confusa y presenta lagunas importantes. En EEUU, en vista de la falta de datos e información precisa sobre proyectos de USAID en Haití, acaba de aprobarse una Ley para mejorar el acceso a información sobre el uso de fondos de cooperación<sup>31</sup>(Equal Times, 2014; NBCNews, 2015).

Los proyectos para construcción de viviendas se encuentran entre los más cuestionados<sup>32</sup>. Las iniciativas de distintos gobiernos y organismos multilaterales presentaron numerosos problemas. En 2014, muchas de las viviendas construidas (una parte muy menor de lo proyectado) estaban ocupadas de manera irregular y sin acceso a servicios básicos (agua y electricidad). Muchos de los ocupantes son personas que, aunque tienen un problema de vivienda a resolver, no fueron víctimas del terremoto. Estos últimos son en su inmensa mayoría pobres, y no pueden pagar los costos de hipoteca o alquiler (HGW, 2014).

Por ejemplo, el proyecto del BID “400 en 100” (400 casas en 100 días), que contó con un presupuesto de aproximadamente USd 30 millones, fue inaugurado en 2012, pero los servicios de agua y electricidad solo pudieron construirse en 2014 por falta de presupuesto. El barrio fue construido para las víctimas del terremoto, pero viven mayoritariamente funcionarios públicos, que son quienes pueden pagar los Usd 39 a 45 mensuales de la hipoteca (HGW, 2014).

---

<sup>31</sup> Un informe del gobierno de EEUU afirma que las presentaciones de la USAID al Congreso no incluyen suficiente información sobre el uso de fondos e implementación de actividades, por lo que éste no dispone de información lo suficientemente detallada sobre el avance de los proyectos de reconstrucción, los montos comprometidos y los desembolsos efectivamente realizados (Gobierno de EEUU, 2013). Según el ranking que elabora la organización Aid Transparency International (AIT), la USAID, la agencia que canaliza la mayor parte de AOD de EEUU, y una de las principales dadoras de fondos para la reconstrucción de Haití, figura en el puesto 31 entre 68 países, con un nivel de satisfacción del 40,3 sobre 100. Entre las principales falencias que impiden el acceso público a la información se cita la falta de documentación sobre los proyectos, la poca claridad y ausencia de datos desagregados, lo que dificulta el seguimiento y puede llevar a confusión. <http://ati.publishwhatyoufund.org/donor/ususaid>

<sup>32</sup> Otro caso controvertido es el de la introducción masiva de semillas de maíz híbrido de Monsanto a través de USAID en el marco de sus programas de apoyo a pequeños agricultores. Según denuncian diversas organizaciones, la USAID aceptó la donación de Monsanto desoyendo la recomendación de no hacerlo de distintos informes y expertos que evaluaron la situación de producción de alimentos luego del terremoto. Monsanto habría utilizado la capilaridad y extensión de los programas de USAID para introducir una semilla híbrida que no estaba autorizada en Haití, desplazando a semillas autóctonas y generando dependencia a futuro (HGW, 2011b).

En 2011 el Fondo para la Reconstrucción tenía comprometidos fondos por USd 254,5 millones destinados a construir o reparar 41.759 viviendas de personas afectadas por el terremoto. Las organizaciones haitianas denunciaban por 2011 que de ellas unas 5.400 viviendas (13%) serían construidas en la zona norte de Haití, una región no afectada por el terremoto pero en la que bajo el eufemismo de “Parque Industrial” se estaba construyendo una zona franca destinada principalmente a maquilas textiles, el Parque Industrial de Caracol (PIC) (HGW, 2011a). Entre los argumentos de quienes defendían esta inversión se encontraba la necesidad de promover el desarrollo y flujo de población desplazada por el terremoto hacia la zona Norte y Nordeste del país (IPS, 2011; Gender Action, 2013).

Finalmente, luego de un comienzo muy lento, en los últimos años se ha logrado relocalizar a 95% del millón y medio de personas que se habían trasladado a campamentos, aunque muchas de ellas han sido relocalizadas en “abrigos temporarios” sumamente precarios. En la actualidad, pasados casi seis años del terremoto, 85.000 personas aún viven en campamentos, y unas 200.000 están viviendo en casillas de madera sin acceso a agua, electricidad o saneamiento, en barrios marginales de Puerto Príncipe (HGW, 2014; NBCNews, 2015).

Además de la falta general de planificación y gestión (HGW, 2014), entre las dificultades que podrían explicar las demoras y deficiencias varias se encuentran la contratación de empresas extranjeras, subcontrataciones, sobrepagos y tercerización (NBCNews, 2015). Una auditoría del Gobierno de EEUU que revisó varios proyectos de la USAID identifica, por ejemplo, un caso en el que la subestimación de costos, la introducción de cambios en el proyecto y las permanentes demoras elevaron el presupuesto de USd 59 a 97 millones. El proyecto original tenía como meta la construcción de 4.000 viviendas, lo que se recortó a algo más de 2.000. En 2015 se han construido apenas 906 (Gobierno de EEUU, 2015).

Por otra parte, algunos proyectos actuales de cooperación podrían estar contribuyendo aún más a la privatización de los servicios. Por ejemplo, frente a un sistema precario que deja sin electricidad a 70% de la población, USAID está financiando un programa de “Reforma del Sector Eléctrico”<sup>33</sup>. Como parte del proyecto se ha establecido un “Contrato de Gestión de la Transición” que pone temporariamente la gestión del servicio público de electricidad en las manos de la compañía estadounidense Tetra Tech, la cual resalta en su propia página de Internet el papel protagónico que

---

<sup>33</sup> USAID. “Reforma del Sector Eléctrico”.  
<http://map.usaid.gov/PublicProjectDetail?id=a0cd0000011rlRAAQ&cid=Haiti>

ha tenido en el pasado para la privatización de los servicios eléctricos de muchos de los países de América Central<sup>34</sup>.

### *El uso de ayuda al desarrollo en beneficio de las maquilas textiles*

En 2011, el BID lanzó oficialmente el proyecto para la construcción del Parque Industrial Caracol (PIC), un proyecto compartido con los Gobiernos de Haití y de EEUU, la Fundación Clinton, y la compañía Sae-A Co. Ltd., gigante textil de Corea del Sur que provee a firmas como Walmart, Gap, o Levi's, y que, a través de su subsidiaria S&H Global, sería la principal arrendataria del PIC (BID, 2011; SONAPI, 2015).

La construcción del PIC se anunciaba con el objetivo de generar empleo y crecimiento económico en una región que se encuentra entre las más pobres del país. En el momento de la inauguración se hablaba de la creación de decenas de miles de puestos de trabajo. En algunos anuncios se habla de hasta 65.000 nuevos puestos de trabajo directos (BID, 2011).

El BID juega un papel central en la concreción del PIC. Desde 2011 se han implementado tres proyectos<sup>35</sup> y se acaba de aprobar un cuarto proyecto<sup>36</sup>, todos no reembolsables. El que se acaba de aprobar, incluye a la “Sociedad Nacional de Parques Industriales” (SONAPI) como entidad ejecutora junto con el Ministerio de Economía y Finanzas de Haití, y se ha fijado como meta para 2019 la creación de 5.400 puestos de trabajo adicionales, de los cuales 3.150 serían ocupados por mujeres (BID, 2015a).

El proyecto prevé la construcción de infraestructura básica y nuevos edificios industriales para, tal como lo dice explícitamente la información disponible en la página de internet del BID, “*satisfacer la demanda actual de instalaciones generada por el plan de expansión del arrendatario ancla*”, es decir, para posibilitar la expansión y aumentar los beneficios de la principal arrendataria, la maquila textil S&H Global. El argumento para justificarlo es la decisión estratégica de “*fortalecer al arrendatario ancla, pues su éxito es fundamental para atraer a otros en el futuro*” (BID, 2015a).

---

<sup>34</sup> Tetra Tech. Iniciativa de la USAID para la energía limpia en América Central.

<http://www.tetratech.com/en/projects/usaaid-central-america-regional-clean-energy-initiative>

<sup>35</sup> HA-L 1076, proyecto aprobado en 2012 por un valor de USd 50 millones, a noviembre de 2015 se ha desembolsado 84% (<http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title.1303.html?id=HA-L1076>) ; HA-L1081, aprobado en 2013 por un valor de USd 40,5 millones, a noviembre de 2015 se ha desembolsado 85% (<http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title.1303.html?id=HA-L1081>); HA-L1091, aprobado en 2014 por USd 55 millones, a noviembre de 2015 se desembolsó 25% (<http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title.1303.html?id=HA-L1091>)

<sup>36</sup> Proyecto HA – L1101: “Programa de Infraestructura Productiva IV” (<http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title.1303.html?id=HA-L1101>).

Según el mismo documento del BID, éste no sería el único beneficio. Además de los beneficios impositivos del que gozan todas las maquilas textiles en Haití, S&H Global está exceptuado hasta 2016 del pago del alquiler de las instalaciones industriales que tiene actualmente en uso, y hasta 2020 para las nuevas instalaciones. Se espera que el PIC comience a mostrar un balance positivo a partir de 2018, mientras tanto, el BID cubrirá el déficit (BID, 2015a). Una pregunta que cabe hacerse es qué podrá ocurrir cuando acabe el régimen de exención impositiva, o el tratamiento diferenciado para las importaciones textiles de Haití en EEUU. Muy probablemente estas empresas busquen relocalizarse en otros países que ofrezcan condiciones más ventajosas, como de hecho ya ocurrió cuando S&H Global trasladó sus plantas de Guatemala a Haití en 2012 a raíz, precisamente, de la construcción del PIC<sup>37</sup>.

Además de las inversiones para la construcción de las instalaciones propias del área “industrial”, el proyecto demanda grandes inversiones en infraestructura y servicios sin los cuales el PIC no podría funcionar. Estas obras de infraestructura serían financiadas en gran parte por la USAID, con al menos USd 170 millones para la construcción de una planta de generación eléctrica de 25 megawatts y un nuevo puerto de salida de las mercaderías hacia EEUU. La USAID proyectó también la construcción de 5.000 viviendas en los pueblos cercanos al PIC (BID, 2011; CEPR, 2013a; Gobierno de EEUU, 2013).

A pesar de los compromisos y el volumen de fondos aportados, parte de las obras proyectadas por USAID están inacabadas, se rebajaron las metas, o están canceladas. La USAID se ha retirado recientemente de un proyecto de construcción de viviendas en Caracol comprometido con la organización cristiana “*Food for the Poor* (Luke, 2015). También hay denuncias de la pobre calidad de las viviendas e incumplimiento de códigos de construcción en el proyecto Caracol-EKAM (Gobierno de EEUU, 2015), lo que originó la rescisión de contratos con varias contratistas (HRRW, 2015).

Para el caso de la construcción de un nuevo puerto, la USAID ha gastado más de USd 4,25 millones en la realización de estudios de factibilidad por parte de compañías privadas de EEUU que ya tenían cuestionamientos en contrataciones anteriores; la conclusión ha sido que la construcción de un nuevo puerto sería inviable con los costos y tiempos previstos (CEPR, 2013 y 2015). Luego de dos años buscando el aporte de otros financiadores, se resolvió finalmente usar los recursos inicialmente

---

<sup>37</sup> CEPR (2012). <http://cepr.net/blogs/haiti-relief-and-reconstruction-watch/sae-as-risky-play-in-haiti> [Revisado 14 diciembre 2015]

previstos para la construcción del nuevo puerto, para la renovación del ya existente en Cap-Haitien (HRRW, 2014).

Según la información del portal de la USAID, la primera fase de la construcción de la planta de generación de energía ha sido terminada, aunque no se brindan mayores detalles. La planta es propiedad del Estado, pero es gestionada por una compañía privada<sup>38</sup>. A fecha actual la planta tiene una capacidad de 10 megawatts (el compromiso original era de 25MW). Además del PIC, la planta brinda electricidad a 9.000 hogares en las localidades cercanas.

Otro proyecto de cooperación internacional asociado al PIC es la construcción de un relleno sanitario financiado por la Agencia de Desarrollo Francesa (AFD, en francés) en asociación con el BID. Este proyecto incluye también otras actividades relacionadas con la gestión de residuos en las ciudades de Gonaïves y Cap – Haïtien, por un valor algo superior a USD 6 millones. La página de la AFD no ofrece detalles actualizados sobre el estado de implementación del proyecto<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Portal de USAID. <http://map.usaid.gov/PublicProjectDetail?id=a0cd00000011qQhAAI&cid=Haiti> [Revisado 14 de diciembre 2015]

<sup>39</sup> AFD, 2015. <http://www.afd.fr/home/pays/amerique-latine-et-caraibes/alc/haiti/projets-haiti/amenagement-urbain-haiti/gestion-integree-dechets-gonaives> [Revisado 10 de diciembre de 2015]

### La verdadera contribución a un desarrollo sustentable inclusivo

A momento de presentarse el proyecto del PIC, el Embajador de EEUU en Haití sostenía que este tipo de inversiones eran “*la verdadera llave para la prosperidad de los haitianos, lo que contribuiría a que Haití sea más independiente y soberano*”<sup>40</sup> (BID, 2011).

En la misma línea, en todos los proyectos relacionados con el PIC se destaca recurrentemente el aporte que éste tendría para lograr un desarrollo sustentable de la zona, lo que permitiría acabar definitivamente con la pobreza y la exclusión. Sin embargo, es ampliamente conocido el escaso aporte que el tipo de “industria” que busca albergar el PIC – fundamentalmente maquilas textiles – puede hacer al fortalecimiento de la economía y el desarrollo local.

No hay dudas sobre la importancia que el sector tiene para la economía haitiana. Según datos del *Center for Economics and Policy Research* (CEPR), 90% de las exportaciones y 10% del PIB de 2014 provenían de este sector. Sin embargo, este peso en la economía nacional no se traduce de igual forma en la generación de puestos de trabajo. En 2015, el conjunto del sector cuenta con 40.000 trabajadores (67% mujeres), esto es menos de 1% de la fuerza de trabajo activa (CEPR, 2015, Gender Action, 2013). Posiblemente un nivel semejante de inversiones en otros sectores de actividad podría tener mejores resultados para la generación de trabajo.

Pero más importante que la baja intensidad laboral del sector, es la precariedad generalizada de las condiciones laborales, de las que dan testimonio numerosas denuncias por violación de derechos laborales, condiciones de salud y seguridad, abusos, hostigamiento, etc. como las que se recogen en informes de la OIT de los últimos años (OIT *et al.*, 2015). Como se verá en las líneas que siguen, estas condiciones distan mucho de las defendidas por el movimiento sindical internacional en su llamamiento a la Conferencia de donantes de 2010 (CSA *et al.* 2010). En palabras de Jean Bonald Golinsky Fatal, Secretario General de la *Confédération des Travaileurs (euses) des Secteurs Public & Privé* (CTSP), “*se trata de un sector en el que los trabajadores y trabajadoras son considerados esclavos*”<sup>41</sup>.

Con respecto al salario, la mayor parte de los trabajadores apenas alcanza a percibir un salario mínimo equivalente a USd 5 por día, un valor que resulta claramente insuficiente. El propio BID pone como meta en sus proyectos “*alcanzar en 2019 una paga equivalente a los Usd 5 por jornada de trabajo*” (BID, 2015a). De acuerdo con una investigación realizada por la organización *Solidarity Center*

---

<sup>40</sup> Embajada de Haití. Comunicado 28 de noviembre de 2011. <http://haiti.usembassy.gov/foundation-stone-caracol-november-28-2011.html> [Revisado 14 de diciembre de 2015]

<sup>41</sup> Comentarios y aportes al estudio por parte de la CTSP. Recibidos por correo electrónico el 19 de febrero de 2016.

(AFL-CIO) tan solo en el transporte y el almuerzo, los trabajadores y trabajadoras gastan aproximadamente la mitad de la paga diaria. Según este estudio, en mayo de 2014 un trabajador necesitaba ganar aproximadamente 1.000 gourdes diarios (alrededor de USd 22 al cambio de esa fecha<sup>42</sup>) para poder cubrir las necesidades más elementales de su familia (AFL-CIO, 2014).

El argumento para defender el mantenimiento de los bajos niveles salariales es la “competitividad” de las textiles haitianas frente a los otros países de la región. En efecto, en sus anuncios para atraer inversiones, la SONAPI señala este punto como una ventaja comparativa: la industria textil de Haití es, junto con la de Nicaragua, la que tiene los salarios más bajos en toda la región, sin duda de un atractivo importante para las maquilas textiles (SONAPI, 2015).

Según denuncia la CTSP, las condiciones de salubridad son notablemente precarias. En muchos casos los trabajadores no tienen acceso a fuentes de agua potable y los servicios sanitarios no cumplen los requisitos mínimos. Algunas empresas llegan a controlar el tiempo de uso de los servicios sanitarios. Muchas veces los trabajadores son impedidos de hablar entre ellos por los altísimos niveles de ruido, y la temperatura en las plantas suele ser agobiante,

Aunque las condiciones de precariedad se extienden indistintamente a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, algunos informes señalan necesidades específicas de mejora para el caso de las mujeres, quienes representan 67% del personal de las maquilas: garantizar condiciones de salud y seguridad con baños, instalaciones sanitarias y servicios médicos adecuados; instalaciones para el cuidado infantil y la lactancia; garantizar el derecho a las licencias por maternidad<sup>43</sup>; y mejorar la representación de las mujeres en espacios de decisión del PIC y la SONAPI (BID, 2015b; Gender Action, 2013).

Con respecto a la organización de las y los trabajadores, el sector es conocido por ser habituales las prácticas anti-sindicales. Al respecto, la CTSP alerta de que aunque con las leyes estadounidenses HOPE y HELP existe cierta presión para que las empresas que se benefician de los subsidios respeten los derechos sindicales, en general se trata de maquillaje que busca mejorar la imagen de la marca y que en la realidad los derechos sindicales son vulnerados permanentemente<sup>44</sup>.

Según un informe de OIT, los trabajadores y trabajadoras de la industria textil de Haití están organizados en 44 sindicatos y están presentes en 18 de las 26 empresas relevadas (OIT *et al*, 2015).

---

<sup>42</sup>[www.oanda.com](http://www.oanda.com)

<sup>43</sup> La CTSP denuncia que en caso de gravidez, las mujeres son despedidas o, en la mejor de las situaciones, suspendidas sin goce de sueldo mientras dure su “licencia” por maternidad.

<sup>44</sup> La organización sindical denuncia por ejemplo el reciente despido de trabajadores que intentaron formar un sindicato en la textil Val d'or Apparel, argumentando que no tenían la autorización de la empresa para hacerlo.

Existe actualmente un espacio de diálogo social con la participación de empleadores y trabajadores, en el que el Ministerio de Trabajo participa como observador. En este ámbito se están discutiendo actualmente mejoras de las condiciones laborales. La CSTP reconoce este espacio e insiste en la necesidad de reforzarlo, en particular en relación con la capacidad técnica de las organizaciones sindicales a fin de estar en pie de igualdad con el sector empleador.

En lo que respecta específicamente a S&H Global, de acuerdo a los datos de Better Work Haití trabajan en la empresa unas 6.500 personas. De ellas, solo 13% de las y los trabajadores a destajo alcanzan o superan la paga mínima al final de su jornada de 8 horas, el resto gana menos que el salario mínimo<sup>45</sup> (OIT *et al*, 2015).

Además, hay irregularidades en los pagos de seguridad social y licencias por maternidad. Se denuncian también casos de acoso sexual, persecución, mala liquidación de despidos, y tratamiento humillante a las y los trabajadores. El último informe de Better Work señala algunas mejoras en términos de salud y seguridad laboral, aunque sigue habiendo deficiencias: falta de controles médicos, niveles de sonido y temperatura muy por encima de lo aceptable (superiores a 30°C) y falta de ventilación. Recién en 2014 se han instalado servicios sanitarios colectivos (baños y retretes)<sup>46</sup> (OIT *et al*, 2015).

Si bien existe un Convenio Colectivo entre la empresa S&H Global y la CTH (Confederación de Trabajadores de Haití), según denuncia la CSTP, el mismo habría sido acordado sin el conocimiento de los trabajadores y trabajadoras. La complicidad de ciertos sindicatos, o la creación de sindicatos funcionales a los intereses empresariales (“sindicatos amarillos”) son prácticas habituales que impiden la conformación de sindicatos independientes.

El estudio de evaluación de impactos sociales y ambientales del PIC, realizado en 2015 por el BID, alerta que el Parque Industrial Caracol podría generar impactos significativos. Por ejemplo, el flujo

---

<sup>45</sup>Desde mayo de 2015 el salario mínimo para trabajadores de la industria textil es de 240 gourdes por día (USD 4,19) y para los que cobran por pieza (a destajo) 320 gourdes por día ( 5,59USD) (Cambio de [www.oanda.com](http://www.oanda.com), 16 de diciembre de 2015)

<sup>46</sup>A nivel país, solo 38% de las y los trabajadores de las textiles que cobran “por pieza” llegan a reunir la paga mínima al final de su jornada de 8 horas, el resto gana menos que el salario mínimo; y 19% de las empresas no cumplen con el pago del salario mínimo. Además, 81% de las empresas no cumplen con las obligaciones de Seguridad Social, 50% no paga adecuadamente las horas extra, y 31% presenta denuncias por despidos injustificados. En términos de salud y seguridad laboral, más de 80% no tienen instalaciones sanitarias adecuadas ni ningún servicio de salud o primeros auxilios 69% no proveen elementos de protección personal y 54% no cumplen con normas básicas de de seguridad química (OIT *et al*, 2015). Aun con todo lo escandaloso que resultan estas cifras, la CSTP cuestiona los criterios que utiliza Better Work Haití para determinar la “conformidad” o “no conformidad” con ciertos parámetros. Por ejemplo la CSTP denuncia que el porcentaje de trabajadores que deben superar el salario mínimo para determinar la “conformidad” de la empresa pasó de 90% a 50% más uno. Es decir, si la mitad más uno de los trabajadores alcanzan el salario mínimo, la empresa se considera “en conformidad”, algo que anteriormente requería el 90% de cumplimiento. Por tanto, algunas mejoras que señalan los informes más recientes de BWH podrían no ser tales.



de población que podría verse atraído por posibles oportunidades de empleo sin una infraestructura de habitación y servicios adecuados podría acabar generando asentamientos sin planificación, desintegración social, contaminación, problemas salud pública, de acceso al agua, a la tierra, etc. De momento esto no ha ocurrido debido a la poca cantidad de puestos de trabajo generados y a la política de emplear prioritariamente trabajadores locales. Sin embargo, el BID expresa preocupación por el cambio de la política de contratación de trabajadores locales por parte de S&H Global, lo que podría generar consecuencias no previstas (BID, 2015b).

Entre los riesgos sociales y ambientales que señala el BID se encuentra el incumplimiento de la normativa laboral. El Banco reconoce que hasta ahora ha habido un avance limitado en la implementación de medidas de mitigación ambiental y social. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento oficial, continúa a través de sus proyectos subsidiando y financiando a la empresa (BID, 2015b).

## Conclusiones

Del análisis histórico de los flujos de cooperación, y más recientemente desde el terremoto de 2010, se puede ver que la cooperación internacional bilateral y multilateral ha fracasado rotundamente en su objetivo de favorecer el desarrollo de Haití. Muy por el contrario, se han reforzado la dependencia, debilitado la economía local y las capacidades estatales.

La escasa canalización de fondos a través de las instituciones públicas es un rasgo también característico de la cooperación internacional con Haití, justificado muchas veces en los flagrantes casos de corrupción e inestabilidad política.

Aunque las informaciones suelen ser confusas y en muchos casos contradictorias, el uso de fondos en beneficio de grandes empresas, en particular firmas extranjeras, es notable y evidente. Los propios países donantes han debido revisar sus estrategias de cooperación con Haití y reconocen este tipo de irregularidades.

A pesar de este reconocimiento y la autocrítica, se siguen favoreciendo proyectos como el de la construcción del PIC, el cual no solo beneficia a empresas privadas como S&H Global, que obtiene lucros exorbitantes, sino que no promueven en absoluto el pretendido desarrollo local, mucho menos un desarrollo sustentable inclusivo.

El “éxito” de estas empresas se basa en exenciones impositivas, tratamientos preferenciales, y en la violación de derechos y explotación laboral de hombres y mujeres. La complicidad de las agencias de cooperación y organismos multilaterales es contraria a todos los requerimientos y criterios de la ayuda internacional.

### Notas sobre metodología

El estudio de caso sobre la cooperación en Haití fue considerado de interés por las numerosas denuncias y cuestionamientos a la forma en que se distribuyeron y gestionaron los voluminosos fondos de cooperación que se destinaron a la reconstrucción y recuperación del país después del terremoto de 2010, el bajo nivel de ejecución y los pobres resultados obtenidos.

Por otra parte, la CSA y CSI vienen trabajando intensamente a través de sucesivos proyectos para fortalecer la organización de las y los trabajadores haitianos, y para que los esfuerzos nacionales, internacionales y multilaterales tomen en cuenta al trabajo decente como motor fundamental para una verdadera recuperación, garantizando la dignidad y pleno ejercicio de derechos.

Se profundizó sobre el caso elegido por el interés de involucrar fondos bilaterales y multilaterales, y porque justamente bajo el argumento de generar trabajo como motor de un desarrollo sustentable, favorece un tipo de inversión que es contrario a estos objetivos y que es motivo de lucha del movimiento sindical no solo en Haití sino en muchos otros países de la región y del mundo.

Para el estudio se consultaron sitios oficiales de gobiernos y organismos involucrados, bibliografía y artículos periodísticos, y publicaciones de organizaciones sociales, sindicales y centros de investigación, principalmente haitianos y estadounidenses. En todos los casos se buscó contrastar la información con diversas fuentes, las denuncias que no se han podido contrastar se han descartado.

Finalmente, se ha contado con el valioso aporte de la CTSP que ha contribuido con información de primera mano acerca de las condiciones laborales en el país, en particular para el caso de las maquilas textiles y la empresa S&H Global.

### ***C. Colombia: Agua y saneamiento en Cartagena. El conflicto entre la cooperación y la maximización del beneficio privado***

<b>País donante:</b>
España Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) <a href="http://www.aecid.es">http://www.aecid.es</a>
<b>Programa:</b>
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) <a href="http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas">http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas</a>
<b>Receptor:</b>
Colombia. Alcaldía de Cartagena de Indias.
<b>Proyectos:</b>
1) <i>Agua y alcantarillado en el Barrio Nelson Mandela, Cartagena de Indias (COL-015-B)</i> 2) <i>Construcción de instalaciones hidrosanitarias en viviendas de la zona suroriental de Cartagena de Indias (COL-017-B)</i> 3) <i>Ampliación de la planta potabilizadora El Bosque y abastecimiento de los barrios de la zona sur occidental de Cartagena de Indias (COL-036-B)</i> Localización: Cartagena de Indias Donación total de España: USd 16 millones <sup>47</sup> <a href="http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/donde-trabaja/paises/colombia.html">http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/donde-trabaja/paises/colombia.html</a>
<b>Actores involucrados</b>
AECID Alcaldía de Cartagena de Indias Empresa Aguas de Cartagena (Acuacar) / Aguas de Barcelona (AgBar) / Suez
<b>Resumen:</b>
Los tres proyectos financiados por el FCAS en Cartagena de Indias representan el 20% de los recursos del FCAS destinados a Colombia. En los tres casos está involucrada la empresa mixta Aguas de Cartagena (Acuacar), que presta el servicio desde su privatización en 1995, y de cuyo paquete accionario Aguas de Barcelona posee

<sup>47</sup> Corresponde aproximadamente a la suma del montante de los tres proyectos. Tasa de cambio tomada del Conversor de Divisas de Oanda - <http://www.oanda.com/lang/es/currency/convert/>

46%. En dos casos la participación de Acuacar es en calidad de entidad ejecutora del proyecto, en el otro como contratista.

De acuerdo con denuncias realizadas por diversas organizaciones no gubernamentales de España y Colombia, ha habido intención de beneficiar a la empresa al otorgar 20% de los fondos destinados a Colombia para financiar obras de Acuacar, generando beneficios económicos por encima de lo razonable para la empresa, la cual, además, ha aumentado las tarifas de manera desproporcionada. La reciente prórroga del contrato por otros 13 años, concedida clandestinamente por la Alcaldía y faltando 6 años para el vencimiento del contrato inicial, es fuertemente cuestionada por distintos sectores sociales, incluido el Sindicato de los Trabajadores de Acuacar, el cual ha denunciado incumplimientos del contrato de concesión y precariedad de las condiciones laborales.

## Introducción

Uno de los principales programas de la Cooperación Española para América Latina es el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)<sup>48</sup>, creado por la Ley 51/2007<sup>49</sup>. Su objetivo es extender el abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales y periurbanas en una región donde en 2015 unos 35 millones de personas aún no cuentan con acceso a fuentes de agua seguras, y 120 millones carecen de acceso a saneamiento<sup>50</sup>.

Se estima que los distintos proyectos financiados por el FCAS brindarán acceso a fuentes de agua mejoradas y saneamiento a tres millones de personas. Unas 600.000 personas recibirán formación en salud e higiene, y 10.000 trabajadores y trabajadoras de los servicios de agua y saneamiento recibirán formación. Además, se facilitará la integración de mujeres en 800 Comités de Agua” (Gobierno de España, 2015).

A siete años de lanzado el FCAS, se han desembolsado un total de USd 1.435 millones, de los cuales casi USd 890 millones<sup>51</sup> corresponden a donaciones de España, y el resto a aportes de los países receptores de la ayuda, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)<sup>52</sup>.

En total 19 países latinoamericanos y caribeños han recibido o están recibiendo ayudas del FCAS. En los países considerados altamente endeudados (Haití, Bolivia, Honduras y Nicaragua), el aporte es de hasta 100% del presupuesto; para otros países la ayuda llega hasta 80% (Colombia, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y República Dominicana); y en países considerados de renta media (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Panamá y Uruguay), el aporte llega hasta 50% del valor del proyecto.

La cartera de 66 proyectos<sup>53</sup> del FCAS se gestiona por dos vías: la modalidad bilateral, gestionada directamente la AECID y que concentra USd 442 millones en 47 proyectos; y la multilateral,

---

<sup>48</sup><http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas>

<sup>49</sup>Disposición adicional sexagésima primera. Disponible en [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Fiscal/151-2007.t8.html#daSEXAGESIMAPRIMERA](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/151-2007.t8.html#daSEXAGESIMAPRIMERA)

<sup>50</sup> La cobertura de agua llega a 97,3% en ámbito urbano y 83,3% en el rural; en tanto que las instalaciones de saneamiento cubren 85,9% de la población urbana y 61,9% de la rural. Base de datos del Banco Mundial (2015). <http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN.UR/countries/1W-XJ?display=graph> [Revisado: 18 de noviembre de 2015]

<sup>51</sup> Equivalente a 1.276 y 790 millones de euros respectivamente, al cambio de OANDA del 30 de septiembre de 2015.

<sup>52</sup>Datos publicados por la AECID el 8 de junio de 2015. Disponible en: [http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/noticias/noticias/2015\\_06\\_08\\_Evento\\_Agua\\_y\\_Saneamiento\\_Casa\\_de\\_America](http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/noticias/noticias/2015_06_08_Evento_Agua_y_Saneamiento_Casa_de_America) [Revisado 30 de septiembre de 2015]

<sup>53</sup>Cartera de proyectos del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento - FCAS [http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/documentos/CARTERA\\_GLOBAL\\_FCAS.pdf](http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/documentos/CARTERA_GLOBAL_FCAS.pdf) [Revisado 30 de septiembre de 2015]

gestionada con la participación del BID, con USd 446 millones y 19 intervenciones<sup>54</sup>. A diciembre de 2014 se había ejecutado cerca de 48% del presupuesto (Gobierno de España, 2015).

Al ser un fondo “no ligado” cualquier empresa, de cualquier país, puede presentarse a licitación, las cuales se realizan según la normativa del país receptor del fondo, o la del BID en caso de procesos donde interviene el Banco. Sin embargo, diversas organizaciones<sup>55</sup> denuncian que muchas veces los principales contratos para la ejecución de obras se adjudican a empresas españolas<sup>56</sup>. Se denuncia asimismo que, aunque entre los objetivos del FCAS se encuentra el de “*apoyar una gestión pública integral y participativa de los recursos de agua*”<sup>57</sup>, en ocasiones la gestión de los proyectos es otorgada a Asociaciones Público Privadas (APP) en las que participan empresas de capitales precisamente españoles.

---

<sup>54</sup>Los montos señalados corresponden a los fondos de la Cooperación Española, para llegar al monto total de los proyectos deben adicionarse los aportes de los países receptores y del BID. Tasa de conversión de Oanda, 30 de septiembre de 2015.

<sup>55</sup>Entre las organizaciones que han denunciado estas situaciones se encuentran Ingeniería Sin Fronteras - ISF (<http://euskadi.isf.es/haiti/noticias.php>) y la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de España (CONGDE)

<sup>56</sup> Según una investigación periodística, 30% de los contratos fueron otorgados a empresas españolas. (El Confidencial, 2015)

<sup>57</sup><http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/que-es-el-fondo/desafios-objetivos/>

### El FCAS en Cartagena de Indias

La ciudad de Cartagena de Indias (o simplemente Cartagena) es uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Ubicada sobre el Mar Caribe, la ciudad tiene alrededor de un millón de habitantes y presenta grandes contrastes, entre áreas y servicios destinados al turismo nacional e internacional, y un índice de pobreza que ronda 27%<sup>58</sup>.

La cobertura de abastecimiento de agua y saneamiento llegaba en 1995, año en que se privatizó el servicio, a 75% de las viviendas. A diferencia de lo sucedido en otros países de la región, la privatización del agua en Colombia no parece haber despertado tanta controversia y, a día de hoy, el país cuenta con más de 125 empresas de agua privadas y 48 mixtas, incluyendo empresas grandes, medianas y pequeñas. La participación de los privados en el abastecimiento de agua tuvo su inicio precisamente en Cartagena en 1995, con el apoyo del Banco Mundial (Gobierno de España, 2011).

En los últimos años, el servicio se ha extendido a prácticamente la totalidad de la población. Esta extensión fue posible en gran medida gracias a los fondos aportados por la AECID a través de su programa FCAS, el cual para 2015 lleva otorgados alrededor de USd 16 millones, lo que equivale a 20% de los fondos comprometidos por el FCAS en Colombia<sup>59</sup>.

Son en total tres proyectos financiados por la AECID. En dos de los casos, la entidad responsable por la ejecución de los proyectos es la empresa a la que se adjudicó la privatización del servicio en 1995, la Asociación Público Privada (APP) **Aguas de Cartagena (Acuacar)**, de la cual casi el 46% del paquete accionario es propiedad de la empresa **Aguas de Barcelona (AgBar)**<sup>60</sup>, con sede en España<sup>61</sup>. En el tercer caso, Acuacar es la contratista<sup>62</sup>.

---

<sup>58</sup> DANE (Dirección Nacional de Estadísticas). Gran Encuesta Integrada de Hogares (2013-2014). Cálculos Grupo de Pobreza <http://www.dane.gov.co/index.php/esp/estadisticas-sociales/pobreza/160-uncategorised/6020-pobreza-monetaria-y-multidimensional-2014> [Revisado 18 de noviembre de 2015]

<sup>59</sup> <http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/donde-trabaja/paises/colombia.html>

<sup>60</sup> El Distrito de Cartagena de Indias participa en la composición accionaria de Acuacar con el 50%; la Sociedad Aguas de Barcelona (Grupo AgBar) es el Socio Operador con el 45,9%; y otros accionistas privados con el 4,1% restante. Información disponible <http://www.acuacar.com/Acuacar/Laempresa/Historia.aspx>

<sup>61</sup> Aunque AgBar está establecida en España, en 2010 pasó a manos de Hisusa Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A, de cuyo capital la francesa Suez era titular de 76%, y La Caixa 24% (<http://www.agbar.es/es/quienes-somos/historia>). Actualmente Suez es propietaria de 100% de las acciones (<http://www.agbar.es/es/quienes-somos/estructura-accionarial>). Por su parte, La Caixa es propietaria del 4,1 al 7% de Suez (<http://www.lavanguardia.com/economia/20140718/54412006051/la-caixa-sale-agbar-convertirse-accionista-suez.html>)

<sup>62</sup> Cabe señalar que este esquema podría estar repitiéndose en otros proyectos del FCAS en Colombia, como el de Santa Marta (COL-019-B), donde la agencia ejecutora es la empresa privada Metroagua, la cual según denuncias está vinculada con la empresa pública Canal Isabel II, de Madrid, que a través de diversas empresas tendría 85% de las acciones de Metroagua. (Documentación facilitada por ISF Catalunya)



Los proyectos financiados por la AECID en Cartagena de Indias son:

*i. Conexión a la red de alcantarillado en el Barrio Nelson Mandela<sup>63</sup>*

El Barrio Nelson Mandela es un área de extrema pobreza en la que viven 40.000 personas, muchas de ellas desplazadas por el conflicto interno. A momento de iniciar el proyecto solo el 15% de las viviendas contaba con servicios de agua y saneamiento. El proyecto se fijó como meta extender la cobertura al 90%.

El proyecto, aprobado en 2009 y para el cual el FCAS aportó casi USd 3,6 millones<sup>64</sup>, alcanzó a la mayoría de las viviendas del Barrio. Sin embargo, según investigaciones periodísticas, desde entonces el costo del servicio se triplicó, lo que hace que muchas familias no estén utilizándolo. Según la investigación mencionada, la empresa solo obtuvo como beneficio 2,5% del total del presupuesto por “gastos administrativos” en su condición de agencia de ejecución del proyecto, tal como está estipulado en las normas del FCAS. Siempre según esta investigación, el beneficio real para la empresa estaría en el cobro a las nuevas viviendas conectadas al servicio (El Confidencial, 2015).

Como los beneficiarios se encuentran en su mayoría en los estratos más pobres de la población, a su factura se le aplica un subsidio del 47%. Aun así, los montos a pagar por los usuarios llegan a valores que rondan los USd 40 mensuales (El Confidencial, 2015), aproximadamente 20% del salario mínimo<sup>65</sup>. En una ciudad donde la informalidad laboral se encuentra casi en el 60% (Jiménez M., 2012), la mayoría de los habitantes del barrio son trabajadores y trabajadoras informales que no alcanzan el salario mínimo.

Sin embargo, éste no es un problema únicamente del Barrio Nelson Mandela. Según una investigación de la organización social Cedetrabajo, los incrementos desproporcionales de las tarifas motivan que cada mes Acucar le suspenda el servicio a casi 19 mil habitantes de Cartagena de Indias por falta de pago (Jiménez M., 2015).

---

<sup>63</sup> COL-015-B: <http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/donde-trabaja/proyectos/COL-015-B.html>

<sup>64</sup> Plan Operativo General del Proyecto “Alcantarillado Faltante Barrio Nelson Mandela” Cartagena de Indias. Mayo 2011. <http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/proyectos/pog/POG-COL-015-B.pdf>.

<sup>65</sup> El salario ronda los USd 210. (Ministerio de Trabajo, 2015. [www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co))

**ii.** *Construcción de instalaciones hidrosanitarias en viviendas de la zona suroriental de Cartagena de Indias*<sup>66</sup>

La ejecución de este proyecto está a cargo de la entidad pública Corvivienda. Inicialmente la obra estaba licitada al consorcio español Unión Temporal Capitol Emprender Cartagena, pero ante diversas dificultades (licitaciones desiertas, problemas técnicos y retrasos de la contratista), finalmente se resolvió contratar a la empresa Acuacar.

Según consta en la documentación disponible en la Web del FCAS, actualizada a diciembre de 2014<sup>67</sup>, el proyecto tendría como beneficiarios a más de 13.000 habitantes, contemplando la construcción de mejoras en 1930 viviendas. El monto total comprometido por la AECID es de aproximadamente Usd 2,2 millones<sup>68</sup>.

El proyecto, firmado en 2009, recién comenzó a ejecutarse a inicios de 2012, y está prevista su finalización hacia mediados de 2016. Según la información de Corvivienda, a fines de 2014 se habían completado las instalaciones de algo más de 900 viviendas, y está previsto llegar a 1026 a lo largo de 2015<sup>69</sup>.

**iii.** *Ampliación de la Planta potabilizadora El Bosque y para el abastecimiento de barrios de la zona sur occidental de Cartagena de Indias*<sup>70</sup>

Este proyecto es el más reciente y el que involucra mayor volumen de fondos de cooperación. Sus objetivos son: aumentar la capacidad de suministro de agua potable; instalar tuberías para abastecer el barrio Villa Hermosa, una zona de extrema pobreza; y realizar baños y otras instalaciones domiciliarias que permitan el aprovechamiento del nuevo servicio. Además de aumentar la continuidad del suministro para varios barrios, se espera que el proyecto beneficie a por lo menos 10.500 personas que al momento de firmar el convenio no contaban con acceso a agua segura.

---

<sup>66</sup> COL-017-B. [http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/proyectos/informe-situacion-junio-2013/COL-017-B\\_FVISIB\\_DIFUSION.pdf](http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/proyectos/informe-situacion-junio-2013/COL-017-B_FVISIB_DIFUSION.pdf)

<sup>67</sup>[http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/proyectos/informe-situacion-junio-2013/COL-017-B\\_FVISIB\\_DIFUSION.pdf](http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/proyectos/informe-situacion-junio-2013/COL-017-B_FVISIB_DIFUSION.pdf)

<sup>68</sup> Plan Operativo Anual -POA- 2014. Proyecto COL-017-B “Construcción de instalaciones hidráulico – sanitarias en viviendas de la zona sur oriental de Cartagena. Fase I” [http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/proyectos/pog/POA\\_2014\\_PROYECTO\\_COL-017-B.pdf](http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/proyectos/pog/POA_2014_PROYECTO_COL-017-B.pdf)

<sup>69</sup>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Plan de Acción Corvivienda 2015. <http://www.cartagena.gov.co/Cartagena/cache/Archivos/Archivos2015/PLANES%20DE%20ACCION/PLAN%20DE%20ACCION%20CORVIVIENDA%202015.pdf>

<sup>70</sup> COL-036-B. <http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/donde-trabaja/proyectos/COL-036-B.html>

El proyecto requiere inversiones por casi USd 19 millones, de los cuales el FCAS ya desembolsó una donación de más de USd 10 millones en 2014<sup>71</sup>, y el resto será aportado por la Alcaldía de Cartagena de Indias, lo que deja el aporte español en casi 55% del presupuesto total de las obras.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE) ha lanzado graves críticas contra el proyecto, entre otras razones porque consideran que detrás de la cooperación existe interés en beneficiar a la empresa Acucar.

En un comunicado de prensa CONGDE denuncia que *“La asignación de este proyecto por parte del Fondo del Agua no es más que una subvención a Aguas de Barcelona. La empresa española consigue financiación pública de cooperación para inversiones comprometidas para Acucar, y aumenta sus resultados de explotación, al financiarse el aumento de producción y usuarios”*<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup><http://iatiregistry.org/dataset/maec-co>

<sup>72</sup>Documentos facilitados por ISF Catalunya.

### Acuacar, denuncias por tratamiento diferencial

El contrato con la empresa Acuacar se firmó en 1994, luego de la privatización de las Empresas Públicas Distritales. El plazo inicial del contrato era de 25 años, pero a fines de octubre de 2014, más de 5 años antes de su vencimiento, la Alcaldía decidió renovar el contrato de concesión por 13 años más, llevándolo a 38 años.

Desde los partidos de la oposición, organizaciones sindicales y sociales denunciaron la ilegalidad y clandestinidad de este acto. De hecho, según las actas de una Asamblea de accionistas de Acuacar la extensión del contrato fue aprobada el 20 de octubre de 2014, pero la información solo se dio a conocer a la población en marzo de 2015 (Jiménez M., 2015; La Marea, 2015). Según sostienen miembros del Concejo Distrital, la decisión debería por lo menos haber sido consultada con el cuerpo de Concejales de la ciudad (Taborda, 2015).

Se alega también que el nuevo contrato perpetúa condiciones favorables a la empresa, por encima de los intereses del distrito. Los críticos señalan que los ingresos que percibe la empresa por la operación de los servicios de agua y saneamiento se han duplicado entre 2007 y 2013 (Jiménez Osorio et al, 2015), siendo que la cobertura se incrementó del 75% al 90% (Jiménez, M. 2015). Según un estudio citado por Jiménez Osorio (2015), la tasa de retorno de la empresa ronda el 54%, cuando lo razonable para cualquier empresa privada sería una tasa no mayor al 10%.

Las organizaciones sociales también cuestionan y ven con cierta suspicacia el hecho de que unos meses después de otorgada la prórroga, el Alcalde de la ciudad haya aceptado una invitación del Gobierno Español para presentar la exitosa experiencia de cooperación en materia de agua y saneamiento (Taborda, 2015).

El sindicato de trabajadores de Acuacar se encuentra entre las organizaciones que se opusieron a la extensión del contrato. En sus manifestaciones públicas denuncian diversos incumplimientos del contrato inicial, como que no hubo transferencia de tecnología y que gran parte del personal está tercerizado (El Herald, 2015).

Sobre este último punto, hace apenas algunos meses, con el auspicio del Ministerio de Trabajo, se ha firmado un acuerdo con la empresa para formalizar el pase a planta de cerca de 100 trabajadores que se encontraban tercerizados. Según consta en el portal Web del propio Ministerio: “*Con la firma de hoy, la empresa tiene un escenario laboral adelantado (...) pues en corto tiempo cumplirá con las normas laborales a través de este convenio*” (Gobierno de Colombia, 2015)<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> Negritas de la autora.

El pase a planta de los trabajadores tercerizados ha sido una demanda recurrente del sindicato de trabajadores de Acucar, por lo que la firma del acuerdo es un importante logro en su lucha por mejores condiciones laborales. Las manifestaciones del Ministro de Trabajo son, sin embargo, un reconocimiento de que la empresa ha incumplido la normativa laboral durante los casi 20 años en que ha estado prestando el servicio en la ciudad.

En cuanto a los procesos licitatorios, el reglamento del FCAS establece que *“las entidades beneficiarias de los países socios ejecutan los proyectos y realizan licitaciones preferentemente según los procedimientos nacionales, salvaguardando los principios de transparencia, igualdad, legalidad y libre competencia”* (Gobierno de España, 2015).

Al respecto, citando a una fuente de la AECID, la investigación realizada por El Confidencial (2015) sostiene que atendiendo a las quejas de las compañías españolas se han realizado ajustes en los requerimientos de las licitaciones, como el alargar los tiempos para presentación de propuestas.

Aunque no se ha podido verificar en este estudio por tratarse de fuentes protegidas, El Confidencial señala el intento de estas compañías de modificar requerimientos formales en los procesos de licitación para generar mejores condiciones de competencia en beneficio de las empresas de origen español, algo que finalmente no se produjo, supuestamente por la negativa de las autoridades colombianas a flexibilizar el proceso (El Confidencial, 2015).

### Conclusiones

La ciudad de Cartagena es una de las más desiguales y pauperizadas de Colombia. Garantizar el derecho de acceso a fuentes de agua segura y saneamiento a 50.000 personas que no gozaban de ese servicio es sin duda una necesidad de primer orden a la que la cooperación española ha dado prioridad. Esta cooperación ha sido fundamental para posibilitar la expansión de Aguas de Cartagena.

Aunque no se puede afirmar que haya habido irregularidades o ilegalidades en los procesos de diseño, aprobación o adjudicación de los proyectos, resultan creíbles las denuncias de que los intereses de Aguas de Barcelona han influenciado la decisión de otorgar 20% de los fondos del FCAS en Colombia a Cartagena de Indias, cuanto más considerando que se trata de una empresa con sede en España.

En el mismo sentido, es muy posible que hayan existido presiones para influir en la decisión de prorrogar el contrato por 13 años cuando aún faltaban seis años para cumplir el plazo inicial.

Es muy cuestionable que los dineros de la cooperación al desarrollo estén financiando la expansión de una empresa privada que muestra beneficios muy por encima de lo razonable y que, además, tiene cuestionamientos de distintas organizaciones sociales por la baja calidad del servicio, lo desproporcionado de las tarifas, e inclusive condiciones laborales precarias.

### Nota sobre metodología

Para el análisis de este caso se revisó información oficial del Gobierno de España disponible en internet: AECID, portal del FCAS, Boletín Oficial del Estado, y Plan Anual de Cooperación Internacional<sup>74</sup>. Se realizó recientemente la primera evaluación de proyectos, pero a la fecha los resultados no son públicos. Se analizó también información oficial disponible en el portal de Acucar.

Además, se realizó una búsqueda en portales de noticias y páginas de ONG españolas y de otros países vinculadas a temas de desarrollo, cooperación, derechos humanos, etc., para identificar denuncias o situaciones que pudieran indicar la orientación del proyecto hacia intereses privados.

Finalmente, se realizaron consultas telefónicas y vía correo electrónico con representantes de ONG de España y de Colombia. Estaba prevista la realización de una visita de campo que finalmente fue postergada a febrero de 2016.

Aunque la mayoría de las fuentes e informes utilizan el Euro como moneda, todos los valores se han convertido a dólares estadounidenses (USd) para guardar coherencia con el resto de los casos y documentos analizados. Para la conversión se tomaron las tasas de cambio de Oanda para la fecha indicada en cada caso<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup><http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Paginas/Cooperacion/Seguimiento.aspx>

<sup>75</sup><http://www.oanda.com/lang/es/currency/convert/>

**D. El Salvador: promover la adecuación de las MyPE a los requerimientos de las grandes transnacionales**

<b>País donante:</b>
Estados Unidos de América - United States Agency for International Development (USAID) <a href="https://www.usaid.gov/">https://www.usaid.gov/</a>
<b>Programa de USAID:</b>
Asocio para el Crecimiento (Partnership for Growth)
<b>Receptor / localización:</b>
El Salvador
<b>Proyectos:</b>
<p><b>“Una mano para crecer” (Walmart)</b> El Salvador, 2011 (No hay información sobre fondos) Agencia de Ejecución: Walmart, Fundación Walmart</p> <p><b>“Desarrollo comercial de Micro y Pequeñas Empresas” (USAID)</b> El Salvador, 2011 - 2016 Donación total de EEUU: USd 3 millones Agencia Ejecución: Compañía Chemonics International</p>
<b>Actores involucrados</b>
USAID Walmart Otros: Chemonics International, CONAMyPE
<b>Resumen:</b>
<p>El Salvador es uno de los principales receptores de cooperación de EEUU. La agencia estadounidense USAID ha desembolsado más de USd 4.500 millones desde 1962, y ha tenido un papel importante en el proceso de reforma económica y privatización de los años 90.</p> <p>En 2011, ambos países firmaron el programa “Asocio para el Crecimiento”. Una porción de los fondos de AOD de ese programa está destinado al proyecto de “Desarrollo comercial de Micro y Pequeñas Empresas”, en el cual se inscribe el acuerdo de colaboración con el proyecto “Una mano para crecer”, de Walmart/Fundación Walmart.</p> <p>El objetivo del proyecto es ayudar a un determinado número de PyME para que puedan adecuar la producción a las necesidades de Walmart y así integrarse a su cadena de proveedores.</p> <p>Más allá de anuncios periodísticos y publicitarios, la colaboración entre Walmart y USAID tiene muchos puntos oscuros y es difícil de seguir. Aparece apenas mencionada en informes de USAID</p>



y de la compañía, y no hay información detallada sobre los proyectos, fondos, ni beneficiarios. Llamativamente, no se encuentra casi información de organizaciones que hacen seguimiento de estos temas, incluso organizaciones que tienen varias denuncias contra Walmart no tienen conocimiento de la existencia de estos proyectos de colaboración con USAID.

De la información disponible públicamente, no está claro cuánto dinero aporta uno y otro al proyecto, ni cuáles han sido las actividades o resultados. Sí está claro que Walmart es una de las empresas que más denuncias y resistencia social enfrenta por sus prácticas deshonestas, la presión y explotación a lo largo de la cadena de proveedores y la violación de derechos laborales.

También está claro que recibe enormes beneficios fiscales y subsidios indirectos, además de evasión y localización de activos en paraísos fiscales.

Solamente estos hechos son de por sí lo suficientemente graves como para cuestionar cualquier tipo de asociación con fondos públicos de cooperación.

## Introducción

Tal como se plantea en la presentación al Congreso de los EEUU del presupuesto 2015 de asistencia al desarrollo, *“la cooperación estadounidense no se trata simplemente de ayudar a los países necesitados, sino de defender los intereses y valores de Estados Unidos de América en el exterior”*, entre ellos garantizar un *“ambiente de estabilidad para el buen funcionamiento del libre mercado”* (Gobierno de EEUU, 2014).

Esta declaración es coherente con la orientación que ha ido adoptando la cooperación de los Estados Unidos de América (EEUU) en los últimos 15 años, priorizando cada vez más los intereses y la creciente participación del sector privado en el diseño e implementación de los proyectos de cooperación. Desde 2001, año en que fuera lanzada la **“Alianza para el Desarrollo Mundial”** (*Global Developing Alliance* o GDA, en inglés), destinada a promover y facilitar la participación del sector privado, la USAID ha ejecutado alrededor de USd 20 billones de fondos públicos a través de más de 1.500 alianzas con más de 3.500 *empresas* (Nieto et al. 2012; Walmart 2015).

La relación formal entre USAID y Walmart se inscribe en este tipo de alianzas. Según lo explicitan funcionarios de la oficina de USAID para América Latina y el Caribe, *“las Asociaciones Público Privadas como ésta [USAID-Walmart] son cruciales para los objetivos de de seguridad alimentaria y creación de empleo a largo plazo. Gracias a estas alianzas, USAID apalanca recursos; los socios privados alcanzan sus metas de negocios; y los pobres mejoran su calidad de vida”* (Gobierno de EEUU, 2011).

En El Salvador, el Programa **“Una mano para crecer”** es un ejemplo de la cooperación entre USAID y Walmart, pero éste no es el único programa, así como tampoco es El Salvador el único país donde USAID y transnacionales estadounidenses concretan este tipo de alianzas. Hay otras muchas iniciativas, por ejemplo, las relacionadas con el Programa **“Feed the Future”** (FtF), del Gobierno de EEUU, para cuya implementación en América Latina la USAID ha establecido alianzas con Walmart<sup>76</sup> y también con *Coca-Cola* (Gobierno de EEUU, 2012b).

---

<sup>76</sup> En octubre de 2010, la Fundación Walmart lanzó la Iniciativa mundial “Global Sustainable Agriculture Goals” (“Metas de Agricultura Sustentable”, en castellano). Por su parte, el Gobierno Estadounidense lanzó en 2008 su iniciativa “Feed the Future” (“Alimentar el Futuro”, en castellano), la cual moviliza unos USD 3,5 billones de 11 agencias gubernamentales. La iniciativa se coordina con gobiernos nacionales, organizaciones de desarrollo y “aliados” del sector privado en 19 países.

En 2011, Walmart y la USAID firmaron un convenio con el propósito de vincular ambos programas en tres países de la región: Guatemala, Haití y Honduras. El convenio da seguimiento a una serie de colaboraciones previas entre Walmart y USAID en América Central. Según la forma en que es presentada en la página Web de

### Cooperación de EEUU para el desarrollo de la MyPE salvadoreñas

La historia de cooperación de EEUU con El Salvador es de larga data. Entre 1962 y 2013, los Estados Unidos han provisto a El Salvador más de USd 4.800 millones como asistencia oficial al desarrollo a través de la USAID o sus antecesoras. La USAID ha tenido también un papel fundamental en los procesos de reforma económica de los años 80 y 90: liberalización del comercio, eliminación de controles de tasas de interés, introducción de impuestos al valor agregado, la privatización de bancos, y la reconversión de zonas francas<sup>77</sup>.

En 2011, fue lanzado el Programa conjunto “**Asocio para el Crecimiento**” (“*Partnership for Growth*”, en inglés), destinado a promover un crecimiento “sustentable e inclusivo” en El Salvador. En el marco de dicho Programa, entre 2011 y 2014 la cooperación bilateral estadounidense destinó a este país un total de USd 171,8 millones. La mayor parte de estos fondos han sido orientados a las áreas de Educación (22,7%), Democracia y Gobernabilidad (22,4%), y Desarrollo Económico (22,1%). El resto se distribuye en gastos de gestión del programa (18%), Salud (7,9%), Asistencia humanitaria (5,4%) y Medio Ambiente (2,5%)

De los USd 37,6 millones que se destinaron a Programas de Desarrollo Económico, la mayor parte (77%) se destinó al fortalecimiento del sector privado, con énfasis en la construcción de capacidades de PyME y la formación de trabajadores; prácticamente la totalidad del 23% restante fue dirigido a fortalecer al sector financiero y otros aspectos macroeconómicos<sup>78</sup>.

El principal proyecto para el “**Desarrollo comercial de las MyPE**” en El Salvador tiene un presupuesto de USd 3 millones y *se extiende de 2011 a 2016. El mismo es gestionado por la compañía Chemonics International*<sup>79</sup>, una de las mayores receptoras de fondos de cooperación de USAID. En el marco de este proyecto se desarrollan diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector

---

la Iniciativa FTF, esta alianza es una “Asociación Público-Privada” que tiene el propósito de generar oportunidades de mercado a los pequeños productores agrarios de América Central, conectándolos con la cadena regional e internacional de proveedores de la compañía. Esto aumentaría los ingresos de los productores y beneficiaría indirectamente a los consumidores de Walmart que tendrían mejor acceso a productos *locales* (Gobierno de EEUU, 2011, 2012a y 2012b; Walmart, 2015).

<sup>77</sup> Portal de la USAID. <https://www.usaid.gov/el-salvador/history> [Revisado 3 de diciembre de 2015]

<sup>78</sup> Portal de USAID. “Resultados de la cooperación” Años 2011 a 2014 - <https://results.usaid.gov/el-salvador/#fy2014> [Revisado 3 de diciembre de 2015]

<sup>79</sup> La compañía Chemonics está ubicada en el área de Washington DC y es responsable por la ejecución de numerosos proyectos en todo el mundo. Varios antiguos altos funcionarios de países receptores de fondos de USAID son parte actualmente de Chemonics International. Más información en [www.chemonics.com](http://www.chemonics.com) [Revisado 4 de diciembre de 2015]

de las micro y pequeñas empresas (entre 10 y 50 trabajadores), sector que representa a 98% de las empresas salvadoreñas<sup>80</sup>

### Walmart, gigante de las ventas y el empleo (y la evasión)

En 2011, las ventas de Walmart alcanzaron los USd 419.000 millones. La compañía contaba con 8.900 tiendas bajo 60 marcas en 15 países, y daba empleo a dos millones de trabajadores. En los últimos años la compañía ha tenido una importante expansión, especialmente a nivel internacional. Para 2014 las ventas habían trepado a USd 485.700 millones, con 11.489 tiendas, bajo 60 marcas diferentes en 27 países, dando empleo a un total de 2,2 millones de trabajadores (Walmart, 2012 y 2015).

Según el *ranking* elaborado por Forbes, la empresa ocupa actualmente el primer puesto en ventas en el mundo, y el puesto número 18 en volumen de ganancias, con USd 16.400 millones en 2014. De acuerdo a estas cifras, en los últimos 10 años las ventas aumentaron 55,6% y las ganancias 49% (Forbes, 2015). *Aproximadamente un tercio de los beneficios declarados en los últimos años provienen del sector internacional de Walmart (AFT, 2015).*

Según un estudio presentado en junio de 2015 por la organización estadounidense “Americans for Tax Fairness” (ATF), los subsidios y las exenciones impositivas que, por medio de diversos mecanismos, reciben Walmart y la familia Walton (propietaria de la compañía) en EEUU superan los USd 7.800 millones anuales. Además, al menos 25 de las 27 compañías de Walmart que operan en el exterior son propiedad de subsidiarias localizadas en “paraísos fiscales”. Por ejemplo, las 89 tiendas de Walmart en El Salvador<sup>81</sup> son propiedad de la firma TFB Corporation NV, *registrada en Curaçao (ATF, 2015).*

De esta forma, 90% de los activos de la División Internacional de Walmart (USd 76 billones, lo que equivale a 37% de los activos globales de la compañía) se encuentran colocados en una compleja y no declarada<sup>82</sup> red de 78 empresas “fantasma” registradas en 15 paraísos fiscales, en los cuales la compañía no posee tiendas. Este esquema habría sido fundamental para permitir la expansión de la

---

<sup>80</sup><http://chemonics.com/OurWork/OurProjects/Pages/El%20Salvador%20Trade%20Development%20for%20Small%20and%20Medium%20Enterprises.aspx> [Revisado 4 de diciembre de 2015]

<sup>81</sup> Las 690 tiendas de Walmart en América Central se encuentran en Costa Rica (217), El Salvador (89), Guatemala (217), Honduras (81) y Nicaragua (86) (ATF, 2015).

<sup>82</sup> Este esquema se habría mantenido oculto a los especialistas en evasión impositiva debido a la forma en que Walmart ha realizado las declaraciones de activos a la Comisión de Seguridad e Intercambio (Securities and Exchange Commission - SEC). Walmart estaría infringiendo la ley al no cumplir con la norma que exige declarar subsidiarias que representen más de 10% de sus activos o ingresos (ATF, 2015)

compañía en el exterior; estaría permitiendo minimizar la carga impositiva en los países donde la firma sí tiene tiendas y trabajadores y, al mismo tiempo, evitar el pago de impuestos en EEUU por sus ganancias *en el exterior* (ATF, 2015).

### Intereses corporativos vs. desarrollo local y derechos laborales

De acuerdo con declaraciones del Presidente de la compañía en América Latina: *“nuestro compromiso con la parte de “vivir mejor” de nuestra misión significa que utilizamos el tamaño y escala de la empresa para hacer la diferencia en aspectos sociales importantes como la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola”* (Gobierno de EEUU).

*Para cumplir con esta “misión”, la compañía declara que, a través de la Fundación Walmart, ha destinado en 2014 cerca de USd 34 millones a proyectos en algunos de los países en desarrollo en los que opera bajo el título de Responsabilidad Social Corporativa<sup>83</sup> (Walmart, 2015). Esto equivale a 0,007% de los ingresos, o bien 0,2% de las ganancias declaradas ese año<sup>84</sup>, o apenas 0,4% de los beneficios fiscales que recibe cada año la compañía, sin contar lo que estaría evadiendo a través de distintas maniobras deshonestas<sup>85</sup>. La inversión en RSE resulta por tanto bastante poco significativa para los valores que maneja la empresa.*

*Según su Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2014, la empresa no cuenta en América Central con políticas preferenciales para proveedores locales, pero tiene dos programas de apoyo a PyME locales: “Una mano para crecer” (manufacturas) y “Tierra Fértil” (agronegocios), los cuales según datos no verificados de la compañía, beneficiaban en 2014 a 309 proveedores de manufacturas y 1.400 pequeños agricultores respectivamente (Walmart, 2014).*

*En este mismo Informe, la empresa no consigna datos referidos al respeto de los derechos humanos y laborales a lo largo de sus cadenas de proveedores en América Central, y manifiesta no haber recibido ninguna denuncia sobre este punto entre 2013 y 2014, ni respecto a sus proveedores ni a la propia compañía<sup>86</sup> (Walmart, 2014).*

---

<sup>83</sup> Dentro de EEUU, los fondos destinados a RSE en 2014 fueron de alrededor de USd320 millones (Walmart, 2015)

<sup>84</sup> USd 16.400 millones de ganancias y USd 485.700 millones de ventas (Forbes, 2015)

<sup>85</sup> Según AFT (2015), USd 7.800 por año de beneficios fiscales varios.

<sup>86</sup> Si provee de datos sobre reclamaciones por violación de derechos laborales en México durante 2014.

*Esto contrasta abiertamente con la cantidad de denuncias y reclamaciones que organizaciones de trabajadores y otras organizaciones salvadoreñas y regionales vienen realizando contra la propia Walmart y sus proveedoras<sup>87</sup>. Por ejemplo, la federación sindical internacional UNI denunciaba públicamente en 2014 el asesinato de un representante sindical de una empresa salvadoreña proveedora de Walmart. Según UNI, el sindicato venía denunciando persecución laboral y amenazas de muerte. El asesinato se presentó en los medios y en la justicia como un crimen ordinario<sup>88</sup>.*

Existen también denuncias sobre posibles casos de corrupción, por ejemplo para obtener ilegalmente permisos de construcción en municipios de El Salvador<sup>89</sup>, y sobre el efecto negativo para la economía local al destruir pequeños comercios y tiendas locales<sup>90</sup>.

Esta situación no es exclusiva de El Salvador, sino que las denuncias con respecto a las prácticas de la compañía aparecen de manera recurrente en todos los países en los que ésta tiene sus tiendas. Estas denuncias recorren un amplio espectro, como tercerización, trabajo esclavo, bajos salarios, o el impedir la sindicalización de sus trabajadores y trabajadoras<sup>91</sup>. Según la organización sindical estadounidense AFL-CIO, la forma de hacer negocios de la compañía define el “**modelo Walmart**”, el cual busca permanentemente bajar los precios que se pagan a los proveedores locales y reducir los tiempos de producción, lo que impide garantizar puestos *de trabajo decentes y seguros, especialmente en las etapas más bajas de las cadenas de proveedores* (AFL-CIO, 2013).

*Algunas organizaciones también señalan la influencia sobre el poder político, corrupción y compra de voluntades<sup>92</sup>. Todas estas denuncias hacen que la compañía figure entre las peor valoradas del*

---

<sup>87</sup> Entrevista telefónica con Roberto Zaldaña, asesor técnico del Consorcio de mujeres salvadoreñas trabajadoras de maquilas, realizada el 3 de diciembre de 2015.

<sup>88</sup> UNI, enero de 2014. [www.uniglobalunion.org/es/news/sindicalista-de-ld-proveedora-de-textiles-para-walmart-asesinado-en-el-salvador](http://www.uniglobalunion.org/es/news/sindicalista-de-ld-proveedora-de-textiles-para-walmart-asesinado-en-el-salvador) [Revisado: 29 de noviembre de 2015]

<sup>89</sup> “Mejicanos, los primeros 7 meses de una gestión desastrosa”. Septiembre de 2014. <http://ceal-dlca.org/?p=1904&lang=es>; “Walmart engaña, soborna y destruye el medio ambiente”. Junio de 2013. <http://ceal-dlca.org/?p=1682&lang=es> [Revisados 3 de diciembre de 2015].

<sup>90</sup> Barrison, Steven. “Study Proves It: Walmart Super-stores Kill Off Local Small Businesses” New York Daily News. 4 Mayo 2011. <http://www.nydailynews.com/new-york/brooklyn/study-proves-walmart-super-stores-kill-local-smallbusinesses-article-1.140129> [Revisado 4 de diciembre de 2015].

<sup>91</sup> Ver las múltiples denuncias y campañas en las páginas de Internet de diversas organizaciones sindicales y no sindicales como AFL-CIO ([www.aflcio.org](http://www.aflcio.org)), CEAL ([www.ceal-dlca.org](http://www.ceal-dlca.org)), Corporate Watch ([www.corporatewatch.org](http://www.corporatewatch.org)), Ethical Consumer ([www.ethicalconsumer.org](http://www.ethicalconsumer.org)), OMAL ([www.omal.org](http://www.omal.org)), Our Walmart ([www.forrespect.org](http://www.forrespect.org)), SEIU ([www.seiu.org](http://www.seiu.org)), UNI Global Unions ([www.uniglobalunions.org](http://www.uniglobalunions.org)), entre muchas otras.

<sup>92</sup> Por ejemplo, el pago regular de “propinas” a funcionarios mexicanos (AFL-CIO, 2013); abultadas donaciones para campañas electorales de candidatos a presidente y gobernadores, o el financiamiento de campañas para impedir reformas en la normativa de salud laboral en Estados Unidos de América (<https://corporatewatch.org/company-profiles/asda-wal-mart-influence-lobbying>)

*mundo por la violación de derechos humanos o laborales: figura tercera en el ranking de Public Eye Awards<sup>93</sup>, y cuarta en la del Business & Human Rights Resource Centre (Kamminga, 2015).*

Más allá de las declaraciones de tono filantrópico de la empresa, es evidente que su *misión* es generar los mayores beneficios a favor de sus accionistas. Existen ya casos en que Walmart decidió suspender programas de cooperación por no estar obteniendo el beneficio esperado. Por ejemplo, en *Guatemala, el Proyecto IMARE II, que se desarrollaba en conjunto con USAID dentro del programa Feed the Future, se canceló* debido a que la distancia a los centros de producción no permitía reducir los costos, y a que los productos no despertaban el suficiente interés comercial (Walmart, 2015). Claramente primaron los intereses de la empresa (obtener productos a bajo costo y de fácil colocación) antes que las necesidades e intereses de las comunidades que participaban del proyecto.

---

<sup>93</sup><http://publiceye.ch/case/Walmart/>

### El programa “Una Mano para Crecer” en El Salvador

El programa “Una Mano para Crecer”, es un proyecto de Walmart en América Central para “mejorar las capacidades” de pequeñas y medianas empresas (PyME) para que éstas puedan adecuar su producción a los requerimientos y estándares de la empresa, y así integrarse a su cadena de proveedores.

En El Salvador, el Programa incluye a 25 PyME locales del sector alimenticio (58%), de fabricación de productos para el cuidado personal y del hogar (28%), y textiles (14%), las cuales abastecen a *las tiendas propiedad de la compañía -Walmart, Maxi Despensa, Despensa Familiar y Despensa de Don Juan (Suma, 2013). Cuenta con el apoyo también de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), que facilita y promueve el contacto entre las PyME y la empresa*<sup>94</sup>.

El proyecto comenzó en 2012 y consistió en tres etapas. La primera contempló la realización de un estudio para identificar las áreas en que sus PyME proveedoras deberían introducir mejoras para incrementar su capacidad de producción e integrarse con mayor competitividad en la propia cadena de proveedores de la compañía. Las principales necesidades eran mejorar la capacidad logística de almacenamiento y distribución, aumentar la “eficiencia de los equipos de trabajo”, mejorar el empaque y etiquetado de sus productos, e incorporar tecnología para la gestión administrativa.

La segunda etapa del programa se inició en 2013, y consistió en asesorar a cada una de las 25 PyME que participan en el proyecto para identificar sus propias debilidades y diseñar un plan de mejora que les permita tener una mayor competitividad dentro de la cadena de proveedores de Walmart. En esta fase, las PYME han colaborado con una contrapartida que ascendió al 30% del costo total de la elaboración del plan (Suma, 2013).

Entre los requisitos para poder participar en la iniciativa se exige el cumplimiento de aspectos formales como ser fabricantes, tener menos de 100 empleados, contar con registro sanitario (si aplica a su producto), cumplir con la norma de etiquetado, tener código de barras y brindar un artículo de buena calidad a “precio competitivo”. No se hace ninguna referencia a estándares laborales u otros aspectos que se relacionen con el desempeño social o ambiental<sup>95</sup>.

En 2013, como tercera etapa del proyecto, se creó un Consorcio de Servicios que ofrece a las PyME asistencia técnica para poder cumplir con todos los requerimientos y estándares de Walmart, en

---

<sup>94</sup> Empresarios de la micro y pequeña empresa buscan un nuevo mercado a través de Walmart.  
<http://www.conamype.gob.sv/index.php/novedades/noticias/757-empresarios-de-la-pequena-y-mediana-empresa-buscan-un-nuevo-mercado-a-traves-de-walmart->

<sup>95</sup><http://www.conamype.gob.sv/index.php/novedades/noticias/757-empresarios-de-la-pequena-y-mediana-empresa-buscan-un-nuevo-mercado-a-traves-de-walmart-> [Revisado 3 de diciembre de 2015]



particular en las áreas de logística, etiquetado, empaques; y mejorar las estructuras financieras y estrategias comerciales de las PyME. Un vez más, la asistencia no incluye la mejora de condiciones laborales.

### Acuerdo USAID-Walmart, una pista difícil de seguir

Tal como se anuncia en sitios oficiales del Gobierno de EEUU y de Walmart, y en diversos anuncios periodísticos, el programa “Una Mano para Crecer” recibe el apoyo de la USAID. Esta colaboración se produce en el marco del ya mencionado Programa conjunto de EEUU y El Salvador “Asocio para Crecer”, *como parte de sus proyectos para el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas. Según información publicada por la Revista Suma, la colaboración de USAID ha permitido la contratación de un especialista para realizar el diagnóstico de los obstáculos que impedían crecer e incrementar sus ventas a las PyME proveedoras de Walmart (Suma, 2013).*

*De acuerdo con la información que pone a disposición el Gobierno de EEUU a través de los Informes Semestrales del Programa “Asocio para Crecer”. En 2012 comenzaron las discusiones con Walmart para llevar a cabo una iniciativa por la que la USAID asistiría a 100 micro y pequeñas empresas para que éstas pudiesen mejorar su capacidad de proveer a las tiendas de Walmart (Gobierno de EEUU, 2012c).*

*En efecto, en su siguiente informe (noviembre 2012), el Gobierno de EEUU declara haber asistido técnicamente a 20 MyPE salvadoreñas para que éstas pudiesen cumplir con los estándares de Walmart (Gobierno de EEUU, 2012d). Lamentablemente, los informes financieros y de ejecución de la USAID de esos años no se encuentran disponibles en la Web al momento de realizar esta investigación, por lo que no es posible saber exactamente cuánto de los recursos del Programa fueron destinados a esta actividad<sup>96</sup>.*

La colaboración entre Walmart y la USAID se inscribe bajo el componente “Goal 6: Surmount Low Productivity in Tradables” (Meta 6: aumentar la baja productividad de los productos exportables). Bajo este epígrafe se describen una cantidad de acciones tendientes a fortalecer al sector de las MyPE salvadoreñas. Llamativamente, a pesar de *que la relación entre Walmart y USAID se sigue publicitando en diversos sitios de Internet oficiales y de la empresa*, a partir de 2013 los Informes Semestrales del Programa no vuelven a hacer ninguna mención a la alianza con Walmart. En el sitio de la CONAMyPE (Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, creada en 1996) se menciona el proyecto de Walmart y la colaboración de CONAMyPE, pero en ningún momento se hace referencia a la participación de la USAID<sup>97</sup>.

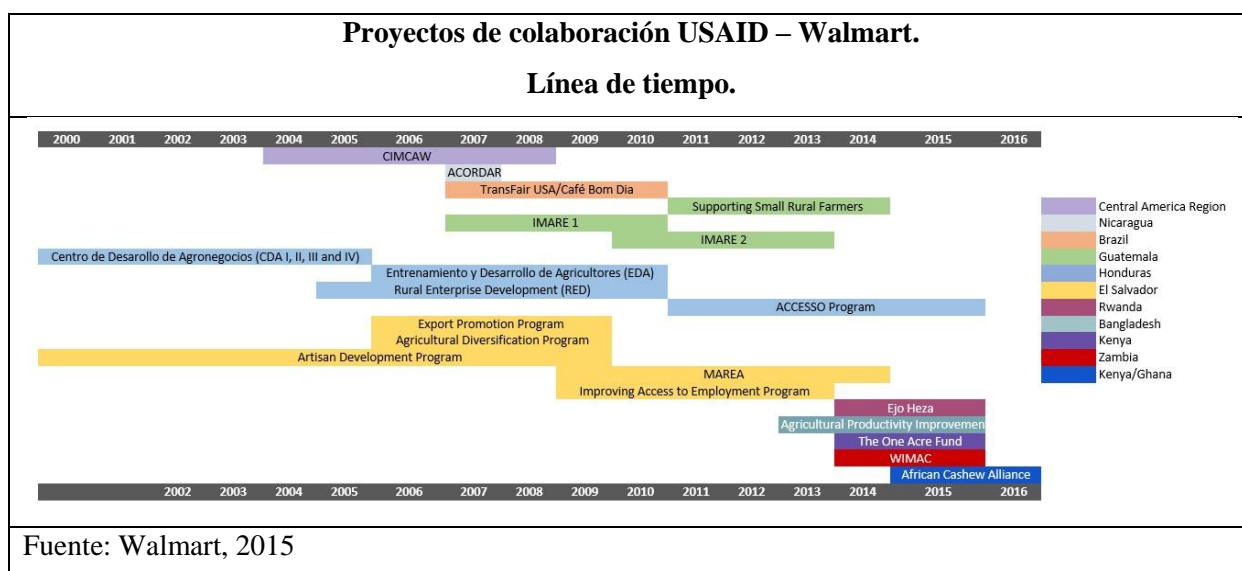
---

<sup>96</sup> Los enlaces provistos en la página oficial de USAID no se encuentran activos.  
<https://www.usaid.gov/results-and-data/performance-reporting> [Revisado por última vez 7 de diciembre de 2015]

<sup>97</sup> [www.conamype.gob.sv](http://www.conamype.gob.sv) [Revisado: 4 de diciembre de 2015]

Por otra parte, la información pública disponible en las Web de Walmart y Walmart Foundation es escasa, y muchas veces confusa y contradictoria, además de no hacer referencia a proyectos, fondos asignados o cualquier otra información específica. Aunque en sus publicidades y declaraciones suele mencionar sus buenas relaciones con la USAID, en sus Informes de Responsabilidad (*Global Responsibility Reports*, GRR) apenas se mencionan proyectos en convenio con USAID. En el caso del Proyecto “Una mano para crecer”, éste no es mencionado en ninguno de los Informes globales<sup>98</sup>, el proyecto solo es listado en un Informe de Walmart México y América Central (Walmart, 2014a).

Según informes de la compañía, la colaboración entre Walmart y USAID en América Central data de inicio de los años 2000. En estos 15 años la compañía declara haber trabajado conjuntamente con USAID en 14 proyectos: uno regional y 13 nacionales – Nicaragua (1), Guatemala (3), Honduras (4), y El Salvador (5).



Llama mucho la atención la escasez de referencias en estudios y publicaciones a la relación entre USAID y Walmart, incluidos documentos de organizaciones que son muy críticas con el papel del sector privado en las políticas de cooperación.

Asimismo, llama la atención la falta de conocimiento e información sobre este tipo de alianzas por parte de organizaciones que cuestionan fuertemente a Walmart, como pueden ser ONG u organizaciones sindicales y de trabajadoras de maquilas en América Central.

De la misma forma, los intentos por obtener información a través de contactos y fuentes directas en organismos gubernamentales no tuvieron buenos resultados. Las personas contactadas manifestaron

<sup>98</sup> Los Informes de 2004 a 2014 se encuentran disponibles en <http://corporate.walmart.com/global-responsibility/global-responsibility-report-archive> [Revisado: 3 de diciembre de 2015]

conocer estos proyectos y, en un principio, se mostraron dispuestas a brindar información (con reserva de sus nombres), pero finalmente cancelaron las entrevistas acordadas.

A raíz de las consultas telefónicas con algunas organizaciones que en principio se suponía tendrían conocimiento de la existencia de estos proyectos, se generó inquietud entre las organizaciones contactadas, en particular el Consorcio de Mujeres trabajadoras en maquilas. Asesores de esta organización realizaron algunas consultas y pudieron identificar que, aparentemente, habría un desvío de fondos de cooperación destinados al fortalecimiento de las MyPE hacia maquilas de capital estadounidense, como Hanesbrands. El mecanismo sería a través de una bolsa de fondos de cooperación de varios países y que sería gestionada por la CONAMyPE.

Lamentablemente, por razones de tiempo y la imposibilidad de hacer una investigación en el terreno no se ha podido verificar adecuadamente esta información. Sería interesante investigar esta pista en un próximo estudio.

## Conclusiones

La relación de colaboración entre la USAID y Walmart en América Central tiene más de quince años, está consolidada y formalizada a través de acuerdos y convenios. Según declara la compañía, entre los años 2000 y 2015 ha habido 14 proyectos conjuntos, de los cuales uno regional y 13 en cuatro países: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Resulta muy llamativo que frente a esta relación histórica de colaboración, no haya prácticamente referencias en la literatura. A esto se suma la muy pobre, contradictoria y poco transparente información pública acerca de estos proyectos, tanto por parte de Walmart y la Fundación Walmart, como por parte de USAID.

En especial en los países receptores de la AOD existen anuncios periodísticos y publicidad sobre estos acuerdos de colaboración. Sin embargo, las organizaciones consultadas para la realización de este estudio (trabajadoras de maquilas, con un historial de resistencia y denuncia frente a Walmart y sus proveedores), no tenían conocimiento sobre estos proyectos.

Las prácticas anti-sindicales y de explotación laboral de Walmart y muchos de sus proveedores son conocidas y cuestionadas por organizaciones sindicales y de derechos humanos en todo el mundo, tanto en EEUU como en los demás países donde Walmart desarrolla sus actividades. Por otra parte, está documentado el efecto nocivo sobre el desarrollo local, al destruir al pequeño comercio y aumentar la presión sobre los proveedores, manipulando precios y tiempos de producción. También están documentadas prácticas ilegales o deshonestas, que incluyen casos de evasión fiscal y corrupción.

Resulta poco creíble que la USAID desconozca este tipo de cuestionamientos tan extendidos y coloque recursos públicos para favorecer actividades que dudosamente vayan a promover el desarrollo local, sino que, por el contrario, pueden generar una monopolización de la producción y comercialización de productos alimenticios y otros bienes en función de intereses comerciales de una transnacional como Walmart.

La orientación de la producción en el sentido de adecuarse a los requerimientos de una empresa determinada pone en riesgo la capacidad de construir un desarrollo local autónomo y de lograr una verdadera soberanía alimentaria en la que los pueblos tengan la posibilidad de decidir sobre su alimentación de acuerdo a su propia tradición e identidad cultural.

### Nota sobre metodología

La selección del caso de estudio surgió a partir de la constatación de existencia de artículos periodísticos y publicitarios sobre la firma de un acuerdo entre USAID y Walmart para implementar el proyecto “Una mano para crecer” en El Salvador.

Por una parte, se hizo una revisión de estudios, publicaciones y artículos periodísticos disponibles en Internet intentando localizar referencias a este proyecto y a la colaboración entre Walmart y USAID en general. Esta revisión no tuvo demasiados resultados, las principales referencias provenían de anuncios y documentos de tono “publicitario” de la propia compañía o de USAID.

En simultáneo, se contactó con personas de referencia que tenían conocimiento sobre Walmart, en particular un antiguo asesor de UNI en Centro América, y un asesor técnico de una organización que agrupa a trabajadoras de maquilas en El Salvador. Por intermedio de este último, se pudo hacer contacto con un representante del Ministerio de Economía que ofreció (bajo anonimato) información relevante sobre fondos movilizados y beneficiarios del proyecto. Sin embargo, no se pudieron obtener datos precisos y la entrevista acordada fue cancelada en reiteradas oportunidades.

En todos los casos se intentó contrastar las informaciones de las diversas fuentes. En los casos en que no fue posible, se adoptaron expresiones en potencial dado que, a pesar de no poderse contrastar la información, ésta resultaba creíble.

## 5. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

### *De la provisión de servicios, al diseño y gestión de proyectos de cooperación*

En el recorrido de los distintos proyectos de cooperación revisados para la realización de este estudio, se puede ver que **la participación del sector privado en las políticas de cooperación al desarrollo no es nueva**. Sí es evidente en los últimos años una **tendencia a que esta participación sea mayor, ya no solo por la vía de la contratación de servicios, sino en el propio diseño y gestión de los proyectos**. En ocasiones no son las propias empresas sino Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a grandes trasnacionales las que actúan como “agentes de ejecución” de proyectos que directa o indirectamente benefician a dichas empresas trasnacionales.

**Los intereses de las propias empresas parecen muchas veces guiar las decisiones de la cooperación internacional de muchos países donantes**. En la mayoría de los casos analizados se observa que los recursos de cooperación se orientan según el propio interés de la empresa, y no necesariamente por las prioridades o las estrategias nacionales de desarrollo, uno de los principios de la cooperación internacional. En este sentido, los fondos de cooperación deben estar indiscutiblemente alineados con las estrategias y prioridades definidas de manera soberana por los países receptores, y no deben de ninguna manera ser motivo de injerencia o imposición de condicionalidades.

Esta orientación de los fondos de cooperación según los intereses privados no es sorprendente si se tiene en cuenta que muchas de las **agencias de cooperación y gobiernos donantes manifiestan explícitamente que sus políticas de cooperación al desarrollo tienen entre sus objetivos prioritarios la expansión del sector privado doméstico en el exterior**, promoviendo sus intereses y generando un ambiente “amigable” para sus inversiones.

No debe perderse de vista en el análisis el **poder económico, político y de lobby** de muchas de estas empresas. Como se vio en algunos de los casos analizados existen muchas veces **vínculos directos con los gobiernos y los centros de decisión, tanto de países donantes como receptores**, además de recurrir habitualmente a prácticas como la corrupción y compra de voluntades, o a amenazas como la de retirar las inversiones del país.

### *Objetivos, beneficios y beneficiarios*

Todos los proyectos analizados expresan formalmente **objetivos absolutamente legítimos**: brindar acceso a vivienda y servicios elementales (agua, saneamiento, energía), diversificar la economía local, promover el desarrollo de pequeños y medianos productores, o generar puestos de trabajo; sin

embargo, en todos ellos es **evidente que las empresas que participan en los proyectos reciben importantes beneficios económicos.**

Los beneficios para las empresas pueden ser **subsidios** indirectos; obtención de **ventajas comparativas**; protección frente a posibles mayores **requerimientos fiscales, ambientales o laborales**; garantías de estabilidad fiscal; publicidad y “**limpieza de imagen**”; servicios de **lobby y diplomacia** frente a gobiernos locales, entre otros.

Sin duda, el hecho de ir de la mano de agencias o proyectos de cooperación internacional provee de **legitimación** y le aporta un carácter **filantrópico** a empresas que muchas veces son cuestionadas o resistidas por las poblaciones locales.

En comparación, los beneficios para las poblaciones vulnerables a los que irían destinados los proyectos no parecerían ser tan importantes, en especial si se pudiera comparar con el **potencial de haber destinado los esfuerzos de cooperación hacia otro tipo de proyectos orientados a fortalecer políticas públicas y las capacidades del propio Estado** para dar respuesta a las necesidades más acuciantes, como combate a la pobreza, soberanía alimentaria, servicios elementales, salud, educación, o generación de trabajo decente.

### ***La medida del aporte a un desarrollo local sustentable***

El sector privado es un agente muy importante para el desarrollo de un país. Deben reconocerse sin embargo, sus **limitaciones para garantizar la protección y ejercicio de algunos derechos**, como pueden ser la protección de los bienes comunes, el acceso universal a servicios esenciales, o la implementación y control de marcos regulatorios, normativa ambiental o laboral. Estas son responsabilidades indelegables del Estado, derechos de los que el sector privado no puede ni debe ser garante.

Para el caso, cabe preguntarse entonces en qué medida este tipo de proyectos articulados entre fondos públicos de la cooperación internacional y grandes transnacionales favorecen o dinamizan realmente un desarrollo local autónomo y sustentable o, por el contrario, **perpetúan relaciones de subordinación y dependencia, e inclusive son funcionales o agravan condiciones socio-laborales de por sí precarias.** De hecho, en todos los casos analizados las empresas involucradas presentan reclamos y denuncias por irregularidades, incumplimiento de normativa, abusos y violación de derechos humanos o laborales.

Por otra parte, suele sostenerse que la instalación o expansión de estas empresas haría un aporte importante a la economía del país receptor a través del pago de obligaciones fiscales. Esto no



parecería ser tan así si se tienen en cuenta las múltiples denuncias sobre **prácticas contables deshonestas, utilización de paraísos fiscales, y evasión fiscal.**

Específicamente en lo laboral, la **generación de puestos de trabajo** se esgrime muchas veces también como uno de los argumentos para promover este tipo de proyectos. Sin embargo, **entre los objetivos e indicadores** de los distintos proyectos revisados **la mención a las condiciones laborales suele ser la gran ausente.**

Con todo, los **resultados en términos de creación de empleo suelen no ser tan importantes como se pretendía, y las condiciones laborales en general distan mucho de ser consideradas trabajo decente.** La subcontratación o tercerización, las prácticas anti-sindicales, las condiciones de salud y seguridad deficitarias son prácticas que las organizaciones sindicales denuncian recurrentemente en las empresas involucradas en los proyectos que se han analizado.

Resulta por lo menos controvertido que los países donantes destinen fondos de cooperación a proyectos conjuntos con empresas que acumulan denuncias y condenas por violación de normas laborales internacionales o nacionales.

La **orientación de la cooperación hacia otros sectores de la economía con mayor intensidad laboral, en especial pequeñas y medianas empresas locales,** podría tener mejores resultados en cuanto a la generación de **más y mejores puestos de trabajo.** Este es un aspecto que debería tenerse en especial consideración al evaluar la conveniencia o no de determinados proyectos.

Debe tenerse presente que el simple hecho de orientar la cooperación hacia sectores más intensivos en mano de obra, cooperativas, pequeñas y medianas empresas no garantiza de por sí la construcción de un desarrollo más justo a largo plazo. Es fundamental tener en cuenta la necesidad en muchos países de **fortalecer los propios mecanismos del Estado** para el diseño, planificación, implementación y monitoreo de sus políticas de desarrollo de manera soberana. Esto incluye reforzar las capacidades de regulación y control sobre el sector privado, algo que la cooperación internacional no debe perder de vista.

### ***Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información***

No siempre está clara la forma en que se da la articulación entre agencias o actores de cooperación y las empresas involucradas en estos proyectos. De hecho, muchas veces **los datos e informaciones públicas de fuentes oficiales son demasiado generales, insuficientes, confusas y hasta contradictorias.**

Cuando existen, las **informaciones por parte de las empresas** suelen ser más confusas aún. En general la información aparece reflejada en **informes voluntarios del tipo de RSE o anuncios**

**periodísticos o propagandísticos**, principalmente en los países receptores de la ayuda en los que estas empresas buscan o necesitan “limpiar” o mejorar su imagen para reducir la resistencia de la comunidad local.

El hecho de que los proyectos respondan a articulaciones directas con empresas puntuales dificulta la transparencia. Entre otros motivos, porque los **estándares y normas de acceso a la información** entre la parte privada y la pública no son los mismos. Distintas leyes eximen a las compañías de hacer pública determinada información que se considera sensible para la empresa, pero que resulta fundamental si se desea tener un control social del uso de los fondos de cooperación.

Por otra parte, resulta en muchos casos llamativa la **falta de información o el desconocimiento** sobre la existencia de este tipo de proyectos, por parte inclusive de organizaciones que tienen un interés específico ya sea en el seguimiento de temas de cooperación, transparencia, o en el monitoreo de las grandes empresas. Es notable asimismo la **“prudencia” con la que se expresaron distintos funcionarios vinculados a los proyectos** que se contactaron durante el proceso de elaboración de este estudio.

La transparencia, el acceso a la información y el establecimiento de **mecanismos de participación** deben sin duda continuar siendo exigencias del movimiento sindical y las organizaciones sociales en general, tanto en los países donantes como en los receptores de la ayuda. En el análisis de casos pudo verse con claridad que aquellas agencias que tienen un mayor nivel de transparencia posibilitan el seguimiento serio y continuado por parte de las diversas organizaciones sociales, lo que brinda la posibilidad de **control social de los recursos públicos** y facilita el monitoreo y evaluación de resultados.

El movimiento sindical, en virtud de su capilaridad y nivel de articulación internacional, podría hacer un aporte significativo para sacar a la luz **informaciones que en muchos casos son intencionalmente ocultadas tanto por parte de gobiernos como de empresas**.

**Las organizaciones sindicales de los países donantes están llamadas a cumplir un papel protagónico**, no solo porque son recursos públicos de sus países los que se desvían hacia el sector privado, sino también por una cuestión de responsabilidad y solidaridad con las y los trabajadores de los países receptores de la ayuda. Además, en general, en los países donantes existen mejores posibilidades de diálogo y control social, marcos regulatorios más fuertes, y las organizaciones suelen contar con mayores recursos financieros y de todo tipo para asignar al seguimiento de estos temas.

En los países receptores de la ayuda también es fundamental contar con una sociedad civil fuerte y articulada que pueda intervenir en los procesos de toma de decisiones y monitoreo. En este sentido, **organizaciones sindicales sólidas y democráticas** pueden jugar un papel clave, tanto por su

capacidad de intervención en la agenda de desarrollo local, como en la dinamización del diálogo con el conjunto de los actores sociales. Las políticas de cooperación no deben dejar de lado este aspecto para poder garantizar su eficacia en términos de promoción del desarrollo basado en derechos.

## 6. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA

- Acucar – Aguas de Cartagena: <http://euskadi.isf.es/haiti/noticias.php> [Revisado 30 de septiembre de 2015]
- AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo: <http://www.aecid.es> [Revisado 30 de septiembre de 2015]
- AFD – Agence Francaise de Développement (2015). [www.afd.fr](http://www.afd.fr) [Revisado 10 de diciembre de 2015]
- AFL-CIO (2013). “*Responsibility Outsourced: Social Audits, Workplace Certification and Twenty Years of Failure to Protect Worker Rights*”. Autor principal: Brian Finnegan, Coord. de Derechos Laborales de AFL-CIO. <http://www.aflcio.org/content/download/77061/1902391/CSReport.pdf> [Revisado: 29 de noviembre de 2015]
- AFL-CIO (2014). “*The High Cost of Low Wages in Haiti. Living Wage Estimate for Export Apparel Workers*”. Solidarity Center. Mayo de 2014. Actualizado, noviembre de 2015. <http://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2014/11/Haiti.Living-Wage-Study-FINAL-updated.3-11-15.pdf> [Revisado 10 de diciembre de 2015]
- AFL-CIO (2015). “*Haiti’s Workers Still Struggling Five Years After Devastating Earthquake*”. Publicado 1 de diciembre de 2015. <http://www.aflcio.org/Blog/Global-Action/Haiti-s-Workers-Still-Struggling-Five-Years-After-Devastating-Earthquake>[Revisado 10 de diciembre de 2015]
- AIT - Aid Transparency International. <http://ati.publishwhatyoufund.org> [Revisado 10 de diciembre de 2015]
- ATF - Americans for Tax Fairness (2015) “The Walmart Web: How the World’s Biggest Corporation Secretly Uses Tax Havens to Dodge Taxes”. Autor: Frank Clemente; Coautor e investigador Marc Auerbach. <http://www.americansfortaxfairness.org/files/TheWalmartWeb-June-2015-FINAL.pdf> [Revisado: 29 de noviembre de 2015]
- Banco Central de Reserva del Perú (2015). *Indicadores Económicos. II Trimestre 2015*. <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf> [Revisado: 6 de noviembre de 2015]
- Barrison, Steven. “*Study Proves It: Walmart Super-stores Kill Off Local Small Businesses*” New York Daily News. 4 Mayo 2011. <http://www.nydailynews.com/new-york/brooklyn/study-proves-walmart-super-stores-kill-local-smallbusinesses-article-1.140129> [Revisado 4 de diciembre de 2015].

- BID – Banco Interamericano de Desarrollo. Base de datos de proyectos. Haití.  
<http://www.iadb.org/en/countries/haiti/haiti-and-the-idb,1008.html> [Revisado 10 de diciembre de 2015]
- BID (2011). “*Haiti and its partners lay the foundation stone for the Caracol Industrial Park*”. Comunicado de Prensa publicado 28 de noviembre de 2011.  
<http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2011-11-28/caracol-industrial-park-in-haiti,9724.html> [Revisado 10 de diciembre de 2015]
- BID (2015a). “*Haití. Programa de Infraestructura Productiva IV (HA-L1101). Propuesta de financiamiento no reembolsable*”.  
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=40004216> [Revisado 14 diciembre 2015]
- BID (2015b). “*Haiti. Productive Infrastructure Program IV (HA-L1101). Environmental And Social Management Report (ESMR)*”. Noviembre de 2015.  
<http://www.iadb.org/Document.cfm?id=39859046> [Revisado 14 diciembre de 2015]
- Brown, Stephen (2014). “*Undermining Foreign Aid: The Extractive Sector and the Recommercialization of Canadian Development Assistance*” en “*Rethinking Canadian Aid*”. University of Ottawa Press. 2014.  
[https://www.academia.edu/9842390/Undermining\\_Foreign\\_Aid\\_The\\_Extractive\\_Sector\\_and\\_the\\_Recommercialization\\_of\\_Canadian\\_Development\\_Assistance](https://www.academia.edu/9842390/Undermining_Foreign_Aid_The_Extractive_Sector_and_the_Recommercialization_of_Canadian_Development_Assistance) [Revisado: 6 de noviembre de 2015]
- CEAL – Derechos Laborales en Centro América. [www.ceal-dlca.org](http://www.ceal-dlca.org) [Revisado 3 de diciembre de 2015]
- CEPR - Center for Economic and Policy Research (2012). “*USAID's Disclosure of Local Partner Info Raises Troubling Questions*”. Publicado marzo 2012. <http://cepr.net/blogs/haiti-relief-and-reconstruction-watch/usaid-disclosure-of-local-partner-info-raises-troubling-questions> [Revisado 12 de diciembre de 2015]
- CEPR - Center for Economic and Policy Research (2013a). “*GAO Report Critical of USAID in Haiti, Bolsters Calls for Increased Oversight*”. Publicado en Junio de 2013.  
<http://cepr.net/blogs/haiti-relief-and-reconstruction-watch/gao-report-critical-of-usaid-in-haiti-bolsters-calls-for-increased-oversight> [Revisado 12 de diciembre de 2015]
- CEPR - Center for Economic and Policy Research (2013b). “*USAID's Lack of Expertise, Reliance on Contractors Puts Sustainability of Caracol in Doubt*” <http://cepr.net/blogs/haiti-relief-and-reconstruction-watch/usaid-lack-of-expertise-reliance-on-contractors-puts-sustainability-of-caracol-in-doubt> [Revisado 12 de diciembre de 2015]

- CEPR - Center for Economic and Policy Research (2015). “*Haiti en chiffres, cinq ans après*”. Publicado en Enero de 2015. <http://cepr.net/en-francais/opinions/haiti-en-chiffres-cinq-ans-apres?highlight=WyJwb3J0II0=> [Revisado 12 de diciembre de 2015]
- Christian Aid (2009). “*Undermining the poor: mineral taxation reforms in Latin America*”. Londres. Septiembre 2009. <http://www.christianaid.org.uk/Images/Undermining-the-poor-report-September-2009.pdf>[Revisado: 6 de noviembre de 2015]
- CNSA – Coordination Nationale de Sécurité Alimentaire (2013). “*Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire*”. Agosto 2013. [http://www.cnsa509.org/Web/Etudes/ESSAN%202013\\_Rapport%20final.pdf](http://www.cnsa509.org/Web/Etudes/ESSAN%202013_Rapport%20final.pdf) [Revisado 9 de diciembre 2015]
- CONAMyPE – Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. [www.conamype.gob.sv](http://www.conamype.gob.sv)[Revisado 3 de diciembre de 2015]
- CONGDE – Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España: <http://www.congde.org/> [Revisado 30 de septiembre de 2015]
- Connor, Tracy, Rappleye, Hannah, y Angulo, Erika (2015). “*What Does Haiti Have to Show for \$13 Billion in Earthquake Aid?*” NBCNews, 12 de enero de 2015. <http://www.nbcnews.com/news/investigations/what-does-haiti-have-show-13-billion-earthquake-aid-n281661>[Revisado 9 de diciembre de 2015]
- Corporate Watch- [www.corporatewatch.org](http://www.corporatewatch.org)[Revisado 3 de diciembre de 2015]
- Coumans, Catherine (2012). “*Cida’s Partnership with Mining Companies Fails to Acknowledge and Address the Role of Mining in the Creation of Development Deficits*” . Brief prepared for the House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development’s Study on the Role of the Private Sector in Achieving Canada’s International Development Interests [http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Mining\\_and\\_Development\\_FA\\_AE\\_2012.pdf](http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Mining_and_Development_FA_AE_2012.pdf)[Revisado: 5 de noviembre de 2015]
- CSA, CSI, IE, ISP (2010). “*El Trabajo Decente es Fundamental para la Reconstrucción y el Desarrollo Sostenible de Haití. Declaración a la Conferencia Internacional de Donantes por un nuevo futuro para Haití. Nueva York, 31 de marzo de 2010*”.[http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Declaracion\\_-\\_Cumbre\\_de\\_la\\_ONU\\_sobre\\_HAITI\\_-ESP.pdf](http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Declaracion_-_Cumbre_de_la_ONU_sobre_HAITI_-ESP.pdf) [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- CSI (2011). “*Solidarité avec des ouvriers de la zone franche*”. Octubre de 2011. [http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Proteste\\_Haiti\\_final\\_oct.pdf](http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Proteste_Haiti_final_oct.pdf)[Revisado 9 de diciembre de 2015]

- De Echave, José (2014). *“La minería y los conflictos sociales en el Perú: Los necesarios escenarios de transición hacia economías social y ambientalmente sostenibles”*. Presentación en el Seminario Nacional “Transición hacia economías social y ambientalmente sostenibles”. Sustainlabour, abril 2014. [http://www.sustainlabour.org/documentos/Jose-deEchave\\_Mineria.pdf](http://www.sustainlabour.org/documentos/Jose-deEchave_Mineria.pdf) [Revisado: 10 de noviembre de 2015]
- Deneault Alain y Sacher William (2012). *“Paradis sous terre. Comment le Canada est devenue la plaque tournante de l’industrie minière mondiale”*. Ecosociété. Montreal. 2012. <http://www.amazon.ca/Paradis-sous-terre-Alain-Deneault/dp/289719006X>
- El Confidencial (2015). *“Colombia: Un negocio en el que siempre ganan los intereses españoles”*. 18 de marzo de 2015. [http://www.elconfidencial.com/espana/2015-03-18/fondo-agua-latam-colombia\\_729421/](http://www.elconfidencial.com/espana/2015-03-18/fondo-agua-latam-colombia_729421/) [Revisado: 17 de noviembre de 2015]
- El Heraldo (2015). *“Critican al alcalde por prorrogar el contrato de Aguas de Cartagena”*. 9 de abril de 2015. <http://www.elheraldo.co/bolivar/critican-al-alcalde-por-prorrogar-el-contrato-de-aguas-de-cartagena-190667> [Revisado: 17 de noviembre de 2015]
- Equal Times (2014). *“La ayuda humanitaria debilitó aún más a Haití tras el terremoto”*. Por Michelle Chen. Publicado en Equal Times, el 8 de septiembre de 2014. <http://www.equaltimes.org/la-ayuda-humanitaria-debilito-aun#.VnKbYY-cFMs> [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- FCAS - Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento: <http://www.fondodelagua.aecid.es> [Revisado 30 de septiembre de 2015]
- Feed the Future (FTF) <http://www.feedthefuture.gov/country/guatemala> [Revisado: 28 de noviembre de 2015]
- Forbes (2015). *“The World’s Biggest Companies. Wal-Mart Stores”*. <http://www.forbes.com/companies/wal-mart-stores/> [Revisado 3 de diciembre de 2015]
- Fundación Pro Cartagena (2015). *“Sindicato de Aguas de Cartagena solicita debate de control político por prorroga al contrato con esta empresa”*, 28 de marzo 2015. <http://funcicar.org/noticia/sindicato-de-aguas-de-cartagena-solicita-debate-de-control-pol%C3%ADtico-por-prorroga-al-contrato> [Revisado: 17 de noviembre de 2015]
- Fundación Walmart. <http://giving.walmart.com/foundation> [Revisado 3 de diciembre de 2015]
- Gender Action (2013). *“Caracol Industrial Park Social and Gender Impacts of Year One of Haiti’s newest IFI-funded Industrial Park”*. <http://www.genderaction.org/publications/caracol.pdf> [Revisado 9 de diciembre de 2015]

- Global Research Institute (2013). “Haiti “Open for Business”: Sourcing Slave Labor for U.S.-Based Companies. Is the Caracol Industrial Park Worth the Risk?”. Publicado 18 de marzo de 2013. <http://www.globalresearch.ca/haiti-open-for-business-sourcing-slave-labor-for-u-s-based-companies/5327292> [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- Gobierno de Australia (2014). “Mid-Term Review of International Mining for Development Centre (IM4DC)”. <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/im4dc-mid-term-review-april14.docx> [Revisado: 5 de noviembre de 2015]
- Gobierno de Canadá (2009). “Building the Canadian Advantage: A Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy for the Canadian International Extractive Sector”. [www.international.gc.ca/tradeagreements-accords-commerciaux/ds/csr-strategy-rse-strategie.aspx](http://www.international.gc.ca/tradeagreements-accords-commerciaux/ds/csr-strategy-rse-strategie.aspx)
- Gobierno de Colombia (2015). “Aguas de Cartagena S.A. suscribe acuerdo de formalización que beneficia a 100 trabajadores”. Ministerio de Trabajo, 9 de julio de 2015. <http://www.mintrabajo.gov.co/julio-2015/4672-aguas-de-cartagena-sa-suscribe-acuerdo-de-formalizacion-que-beneficia-a-100-trabajadores.html> [Revisado 16 de noviembre de 2015]
- Gobierno de EEUU (2010). “Feed the Future. Strategic Review”. USAID. <http://www.feedthefuture.gov/sites/default/files/country/strategies/files/ECAMFTFStragicReview.pdf> [Revisado: 28 de noviembre de 2015]
- Gobierno de EEUU (2011). “USAID and Walmart Join Forces to Help Small Farmers and Enhance Food Security in Central America”. USAID Press Office. 22 de marzo de 2011. <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/usaids-and-walmart-join-forces-help-small-farmers-and-enhance-food> [Revisado: 28 de noviembre de 2015]
- Gobierno de EEUU (2012a). “Doing Business Differently: Fighting Global Hunger Through a Whole-of-Government Approach”. Feed the Future. April 26, 2012. <http://www.feedthefuture.gov/article/doing-business-differently-fighting-global-hunger-through-whole-government-approach> [Revisado: 28 de noviembre de 2015]
- Gobierno de EEUU (2012b). “Feed the Future: LAC Facts Sheet”. [http://www.feedthefuture.gov/sites/default/files/country/resources/files/ftf\\_lac\\_factsheet\\_may2012\\_2.pdf](http://www.feedthefuture.gov/sites/default/files/country/resources/files/ftf_lac_factsheet_may2012_2.pdf) [Revisado: 28 de noviembre de 2015]
- Gobierno de EEUU (2012c). “Six Month Scorecard November 2011 – May 2012. Partnership for Growth. El Salvador – United States”. Julio de 2012. <http://photos.state.gov/libraries/elsavador/92891/PFG/PFG%20-%20Six%20Month%20Scorecard%202012.pdf> [Revisado: 3 de diciembre de 2015]



- Gobierno de EEUU (2012d). “*Six Month Scorecard May 2012 – November 2012. Partnership for Growth. El Salvador – United States*”. Noviembre 2012.  
[http://photos.state.gov/libraries/elsavador/92891/Noviembre2012/PFG%20scorecard%20II%20Final%20\\_English\\_.pdf](http://photos.state.gov/libraries/elsavador/92891/Noviembre2012/PFG%20scorecard%20II%20Final%20_English_.pdf) [Revisado: 3 de diciembre de 2015]
- Gobierno de EEUU (2013). “*Haiti Reconstruction. USAID Infrastructure Projects Have Had Mixed Results and Face Sustainability Challenges. United States Government Accountability Office Report to Congressional Requesters*”.  
[http://foreignaffairs.house.gov/sites/republicans.foreignaffairs.house.gov/files/zkVt\\_d13558\\_Restricted.pdf](http://foreignaffairs.house.gov/sites/republicans.foreignaffairs.house.gov/files/zkVt_d13558_Restricted.pdf)[Revisado 12 de diciembre de 2015]
- Gobierno de EEUU (2014). “*Congressional Budget Justification. Fiscal Year 2015*”. Department of State, Foreign Operations and Related Programs. Publicado 4 de marzo de 2014.  
<https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/9276/222898.pdf> [Revisado: 28 de noviembre de 2015]
- Gobierno de EEUU (2015). “*Haiti Reconstruction. USAID Has Achieved Mixed Results and Should Enhance Sustainability Planning. United States Government Accountability Office – GOA. Report to Congressional Requesters*”. Junio de 2015.  
<http://www.gao.gov/assets/680/670616.pdf>[Revisado 12 diciembre 2015]
- Gobierno de EEUU. “*USAID and Walmart*”. Iniciativa Feed the Future (FTF).  
<http://www.feedthefuture.gov/model/usaaid-and-walmart> [Revisado: 28 de noviembre de 2015]
- Gobierno de EEUU. Mapa interactivo USAID- <http://usaaid.gov.force.com/?l=regional&w=LATIN%20AMERICA%20%26%20THE%20CARRIBEAN>  
[Revisado: 28 de noviembre de 2015]
- Gobierno de España (2007). “*Ley 51/2007, de 26 de diciembre de 2007, sobre Presupuestos Generales del Estado para 2008*”.[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Fiscal/151-2007.t8.html#daSEXAGESIMAPRIMERA](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/151-2007.t8.html#daSEXAGESIMAPRIMERA)
- Gobierno de España (2008). “*Real Decreto 822 de 16 de mayo de 2008, por el que se crea la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento*”<http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/que-es-el-fondo/documentacion/normativa/rd822-2008.html>
- Gobierno de España (2009). Real Decreto 1460 n°: 7 - *Real Decreto 1460 de 28 de septiembre de 2009, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento*:[www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/que-es-el-fondo/documentacion/normativa/rd1460-2009.html](http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/que-es-el-fondo/documentacion/normativa/rd1460-2009.html)

- Gobierno de España (2011). “*Plan Operativo General del Proyecto “Alcantarillado Faltante Barrio Nelson Mandela”*”. Cartagena de Indias”. AECID. Mayo 2011.  
<http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/proyectos/pog/POG-COL-015-B.pdf>
- Gobierno de España (2015). “*Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Informe Anual 2014*”. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Madrid, 2015.  
[http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/documentos/Informe\\_Anual\\_FCA\\_S\\_2014\\_y\\_Anexos\\_completo-1-474.pdf](http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/documentos/Informe_Anual_FCA_S_2014_y_Anexos_completo-1-474.pdf)
- Gobierno de Haití (2009). “*Objectifs du Millenaire Objectifs pour le Developpement. Etat, Tendances et Perspectives*”.  
<http://www.ht.undp.org/content/dam/haiti/docs/mdg/IHSI%202009%20Document%20Analyse%20OMD.pdf>[Revisado 12 de diciembre de 2015]
- Gobierno de Perú (2015a) “*Boletín Estadístico del Subsector Minero*”. Ministerio de Energía y Minas. Abril de 2015.  
<http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/VARIABLES/2015/ABRIL.pdf> [Revisado: 6 de noviembre de 2015]
- Gobierno de Perú (2015b). “*Informe Defensorial N° 171 ¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos*”. Defensoría del Pueblo. Lima, 2015.  
<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-Defensorial-171.pdf>
- Gobierno de Perú (2015c). *Reporte de Conflictos Sociales N° 140*. Octubre 2015.  
<http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php> [Revisado: 6 de noviembre de 2015]
- Gotson, Pierre (2013). “*Reconstruction d’Haïti: une véritable business militaro-humanitaire*”. Publicado por Press-toi-a-gauche, el 16 de abril de 2013.  
<http://www.pressegauche.org/spip.php?article13774>[Revisado 9 diciembre 2015]
- Herbst, Natalia (2013). “*La comunidad internacional y Haití: una historia de desamor. El rol de la cooperación internacional, 1990-2010*”. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. Volumen 2, número 1 (2013).<http://ried.unizar.es/index.php/revista/article/viewFile/46/27>  
[Revisado: 9 de diciembre de 2015].
- HGW – Haiti Grassroots Watch (2011a). “*January 12 victims. Abandoned like a stray dog*”. Publicado 22 de enero de 2011. <http://haitigrassrootswatch.squarespace.com/haiti-grassroots->

- [watch-engli/2011/8/22/january-12-victims-abandoned-like-a-stray-dog.html](http://www.truth-out.org/news/item/917:monsanto-in-haiti) [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- HGW – Haiti Grassroots Watch (2011b). “*Monsanto in Haiti*”. 5 de marzo de 2011. <http://www.truth-out.org/news/item/917:monsanto-in-haiti> [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- HGW – Haiti Grassroots Watch (2012). “*Where does the money for Haiti’s reconstruction go, really?*”. Publicado por *The Schuster Institute for Investigative Journalism* el 13 de enero de 2012. <http://www.brandeis.edu/investigate/political-social-justice/Where-does-the-money-go-in-Haiti-reconstruction.html> [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- HGW – Haiti Grassroots Watch (2014). “*Questions about the reconstruction’s housing projects*”. Publicado 8 de enero de 2014 <http://haitigrassrootswatch.squarespace.com/haiti-grassroots-watch-engli/2014/1/8/questions-about-the-reconstructions-housing-projects.html> [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- HRRW – Haiti Relief and Reconstruction Watch (2014). “*A Failure Foretold: USAID’s Plans to Build a Port in Northern Haiti*” <http://cepr.net/blogs/haiti-relief-and-reconstruction-watch/a-failure-foretold-usaids-plans-to-build-a-port-in-northern-haiti?highlight=WyJwb3J0II0=>
- HRRW – Haiti Relief and Reconstruction Watch (2015). “*USAID says it built houses in Caracol to earthquake Safety Standard. It didn’t*”. Junio de 2015. <http://cepr.net/blogs/haiti-relief-and-reconstruction-watch/usaids-says-it-built-houses-in-caracol-to-earthquake-safety-standards-it-didn-t> [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- IATI – International Aid Transparency Initiative: <http://iatiregistry.org> [Revisado 30 de septiembre de 2015]
- IPS – Inter Press Service (2010). “*Haiti: Cash-for-work seems as a double sword*”. Publicado 10 noviembre de 2010. <http://www.ipsnews.net/2010/11/haiti-cash-for-work-seen-as-a-double-edged-sword/> [Revisado 9 diciembre de 2015]
- IPS – Inter Press Service (2011a). “*Haiti: open for business – Part 1*”. Publicado 20 de diciembre de 2011. <http://www.ipsnews.net/2011/12/haiti-open-for-business-part-1/> [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- IPS – Inter Press Service (2011b). “*Haiti: open for business – Part 2*”. Publicado 20 de diciembre de 2011. <http://www.ipsnews.net/2011/12/haiti-open-for-business-part-2/> [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- ISF – Ingenieros sin Fronteras (2011). “*Esta semana se cumple un año del terremoto que devastó Haiti*”. Publicado 12 de enero de 2011. [www.euskadi.isf.es/haiti/noticias.php](http://www.euskadi.isf.es/haiti/noticias.php) [Revisado 9 de diciembre de 2015]

- ISF – Ingenieros Sin Fronteras: <http://www.isf.es> [Revisado 30 de septiembre de 2015]
- Jiménez Molinello, Leonardo (2015) “*La prórroga del contrato de Aguas de Cartagena: otro negociado más gracias a las privatizaciones*”. Polo Democrático Alternativo, 10 de junio de 2015. <http://www.moir.org.co/La-prorroga-del-contrato-de-Aguas,9603.html> [Revisado: 16 de noviembre de 2015]
- Jiménez Osorio, Shirley y Jiménez Molinello, Leonardo (2015). “*Cartagena: ciudad en crisis por las privatizaciones*”. Capítulo Cartagena. Grupo Económico. Cedetrabajo. <http://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2015/09/CARTAGENA.pdf>
- Kamminga, Menno T. (2015). “*Company Responses to Human Rights Reports: An Empirical Analysis*”. Business & Human Rights Resource Centre. Febrero de 2015 [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2559255](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2559255) [Revisado: 29 de noviembre de 2015]
- La Marea (2015). “*Dionisio Vélez extiende contrato de Acucar*” <http://www.lamarea.co/noticias/dionisio-velez-extiende-contrato-de-acucar/>[Revisado: 16 de noviembre de 2015]
- LANTINDADD (2015). “*Minería en el Perú: Más de mil millones de dólares en elusión fiscal*”. 25 de julio de 2015. <http://www.paguenlojusto.org/2015/07/24/mineria-en-el-peru-mas-de-mil-millones-de-dolares-en-elusion-fiscal/>[Revisado: 10 de noviembre de 2015]
- Le Nouvelliste (2014). “*S&H Global, de zéro pour devenir un héros*”. Publicado 9 de julio de 2014. <http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/133148/SH-Global-de-zero-pour-devenir-un-heros> [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- Leblanc, Daniel (2012). “*CIDA funds seen to be subsidizing mining firms*”. The Globe and Mail. Ottawa, 29 de enero de 2012. <http://www.theglobeandmail.com/news/politics/cida-funds-seen-to-be-subsidizing-mining-firms/article1360059/> [Revisado: 10 de noviembre de 2015]
- Luke, Claire (2015). “*The twisted tale of Caracol housing*”. Publicado por Devex el 16 de enero de 2015. <https://www.devex.com/news/the-twisted-tale-of-caracol-housing-85109>[Revisado 9 de diciembre de 2015]
- Mackrael, Kim (2012a). “*Canada’s Foreign Aid Doesn’t Exist to Keep NGOs Afloat, Fantino Says*.” Globe and Mail, Ottawa, 28 de noviembre de 2012. <http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadas-foreign-aid-doesnt-exist-to-keep-ngos-afloat-fantino-says/article5751774/> . [Revisado: 10 de noviembre de 2015]
- Mackrael, Kim. (2012b). “*Fantino Defends CIDA’s Corporate Shift*.” Globe and Mail. Ottawa, 3 de diciembre de 2012. <http://www.theglobeandmail.com/news/politics/fantino-defends-cidas-corporate-shift/article5950443/> . [Revisado 10 de noviembre de 2015]

- Maffei, Laura; Martín Murillo, Laura; Rivero, Julio (2015). “*La transición hacia una economía más verde y justa en el Perú: propuestas sindicales*”. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Gobierno de Perú. Lima, 2015. (En proceso de edición).
- Making Change at Walmart. <http://makingchangeatwalmart.org/about/> [Revisado: 4 de diciembre de 2015]
- MiningWatch Canada – Mines Alert (2013) “*Backgrounder: A Dozen Examples of Canadian Mining Diplomacy*”. <http://www.miningwatch.ca/article/backgrounder-dozen-examples-canadian-mining-diplomacy> [Revisado: 5 de noviembre de 2015]
- Naciones Unidas. Recursos estadísticos del sistema de Naciones Unidas, 2015. [http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator\\_Code%3aDT.ODA.ALLD.CD](http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3aDT.ODA.ALLD.CD) [Revisado 30 de septiembre de 2015]
- Nieto Pereira, Luis y Ramiro, Pedro (2012). “Sector Privado”. OMAL. Diciembre de 2012. <http://omal.info/spip.php?article4817> [Revisado: 3 de diciembre de 2015]
- OCDE (2012). “*Canada: Development Assistance Committee (DAC) Peer Review 2012*”. Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Paris. <http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/canadapeerreview2012.pdf> [Revisado: 11 de noviembre de 2015]
- OCMAL (2015). Portal del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. <http://www.conflictosmineros.net/>[Revisado: 9 de noviembre de 2015]
- OIT y CFI (2015). “*Better Work Haiti: Industrie du vêtement 11ème rapport de synthèse de Better Work Haïti dans le cadre de la législation HOPE II*”. Organización Internacional del Trabajo; Corporación Financiera Internacional. Ginebra. <http://betterwork.org/global/wp-content/uploads/2015/10/Better-Work-Haïti-11ème-Rapport-Semestriel-dans-le-cadre-de-la-Législation-HOPE-II.pdf> [Revisado 10 de diciembre de 2015]
- OLCA (2015). Portal del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. <http://olca.cl/oca/index.htm>[Revisado: 9 de noviembre de 2015]
- OMAL – Observatorio de las Multinacionales en América Latina: <http://omal.info/> [Revisado 16 de noviembre de 2015]
- OMAL. Observatorio de las Multinacionales en América Latina. [www.omal.org](http://www.omal.org) [Revisado: 29 de noviembre de 2015]
- Ottawa Citizen (2013) “*A Remarkable Year for Canadian Foreign Aid.*” Publicado 27 de diciembre de 2013. <http://ottawacitizen.com/opinion/a-remarkable-year-for-canadian-foreign-aid>. [Revisado: 10 de noviembre de 2015]

- Our Walmart – Organization United for Respect at Walmart. [www.forrespect.org](http://www.forrespect.org) [Revisado 3 de diciembre de 2015]
- Payne, Elizabeth (2013). “*Foreing Affairs/CIDA Restructuring Panel Includes CEO of Rio Tinto Alcan*” Ottawa Citizen, 21 de octubre de 2013. <http://www.nationalnewswatch.com/2013/10/22/foreign-affairscida-restructuring-panel-includes-ceo-of-rio-tinto-alcan/#.VkWG9u9dHIV> [Revisado: 10 de noviembre de 2015]
- Public Integrity (2014). “*After Haiti quake praise becomes resentment*”. Publicado originalmente 10 de enero de 2012, actualizado a 2014. <http://www.publicintegrity.org/2012/01/10/7838/after-quake-praise-becomes-resentment-haiti> [Revisado 9 de diciembre de 2015]
- RepRisk (2009). “*Most environmentally and socially controversial companies May 2009*”. Zurich. Junio 2009. <http://www.reprisk.com/bp-exxon-mobil-and-shell-are-the-most-environmentally-and-socially-controversial-companies-in-may-2009/> [Revisado: 10 de noviembre de 2015]
- RepRisk (2011). “*Water Scarcity Report*”. Zurich. Noviembre de 2011. <http://www.reprisk.com/reprisk-report-on-water-scarcity/> [Revisado: 10 de noviembre de 2015]
- Romero, Alberto y Vera Colina, Mary A. (2014). “*Las empresas transnacionales y los países en desarrollo*” en Revista Tendencias. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño. Vol. XV. No. 2–2do. Semestre 2014 (Julio-Diciembre). Páginas 58-89. [http://www.academia.edu/11430902/Las\\_Empresas\\_Transnacionales\\_y\\_los\\_Pa%C3%ADses\\_en\\_Desarrollo](http://www.academia.edu/11430902/Las_Empresas_Transnacionales_y_los_Pa%C3%ADses_en_Desarrollo) [Revisado 3 de diciembre de 2015]
- Saunders, Sakura: “*CIDA’s Anti-oversight Agenda Canadian Government Agency Sponsors Voluntary Approach to Corporate Regulation*”. Publicado 15 de octubre de 2009. <http://protestbarrick.net/article.php?id=525> [Revisado 8 de noviembre de 2015].
- SONAPI – Societé Nationale des Parcs Industriels (2015). “*Haiti is open for business*”. <http://www.iadb.org/Document.cfm?id=39865472> [Revisado 14 de diciembre de 2015][Revisado 14 diciembre de 2015]
- Summa (2013). “*Walmart de México y Centroamérica y USAID le dan Una Mano Para Crecer a las PYME*”. Revista Summa. 13 de junio de 2013. . <http://www.revistasumma.com/39046/> [Revisado 28 de noviembre de 2015]
- Taborda Herrera, Ernesto (2015). “*El Alcalde viaja a España para afianzar contrato de cooperación*”. El Universal, 4 de junio de 2015. Cartagena de Indias.

<http://www.eluniversal.com.co/politica/el-alcaldede-viaja-espana-para-afianzar-cooperacion-coronado-195948> [Revisado: 17 de noviembre de 2015]

UNI Global Union. [www.uniglobalunion.org](http://www.uniglobalunion.org) [Revisado: 29 de noviembre de 2015]

US Global leadership Coalition (2013). “*What Do Walmart and USAID Have In Common?*”  
<http://www.usglc.org/2013/09/09/what-do-walmart-and-usaid-have-in-common/> [Revisado: 26 de noviembre de 2015]

Walmart – USAID (2015). “*The evolution of a global cross-sector partnership*”.  
<http://wdi-publishing.com/DocFiles/PDF/cases/preview/WDI-1430438P.pdf> [Revisado: 28 de noviembre de 2015]

Walmart (2012). “*Aid for Trade Facilitation. Case Study*”. *Walmart’s Direct Farm Program*.  
<http://www.oecd.org/aidfortrade/48368733.pdf> [Revisado: 28 de noviembre de 2015]

Walmart (2014). “*Materialidad. Informe Financiero y de Responsabilidad Social Corporativa 2014*”. Walmex. <http://www.walmex.mx/informe/2014/pdf/materialidad.pdf> [Revisado: 28 de noviembre de 2015]

Walmart Watch Blog. [www.makingchangeatwalmart.org/category/blog/](http://www.makingchangeatwalmart.org/category/blog/) [Revisado 3 de diciembre de 2015]

WALMEX – Walmart México y Centro América (2014). “*Informe anual de activos, 2013*”.  
<http://www.walmex.mx/assets/files/infoanua.pdf> [Revisado: 28 de noviembre de 2015]

## 7. ANEXOS

### *Anexo I: Entrevistas y sitios Web revisado*

- a) Fuentes consultadas (julio - agosto 2015):
- ✓ ABONG (Associação Brasileira de ONGs) – [www.abong.org.br](http://www.abong.org.br)
  - ✓ ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo) - [www.alop.org.mx](http://www.alop.org.mx)
  - ✓ BNDES sem Segredos - <http://www.ibase.br/bndes/>
  - ✓ CCIC (Canadian Council for International Cooperation) - [www.ccic.ca](http://www.ccic.ca)
  - ✓ CONCORD (Confederación Europea de ONG para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria) - <http://www.concordeurope.org/es>
  - ✓ CONGDE (Coord. de ONGs para el Desarrollo de España) - <http://www.congde.org/>
  - ✓ DESCO (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo) - [www.desco.org.pe](http://www.desco.org.pe)
  - ✓ EURODAD (European Network on Debt and Development) - [www.eurodad.org](http://www.eurodad.org)
  - ✓ HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional) - <http://www.hegoa.ehu.es>
  - ✓ Human Rights Watch, Business - <https://www.hrw.org/topic/business>
  - ✓ Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos) - <http://www.latindadd.org/>
  - ✓ OXFAM – [www.oxfam.org](http://www.oxfam.org)
  - ✓ RoA (Reality of Aid) - [www.realityofaid.org](http://www.realityofaid.org)
  - ✓ SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) – [www.somo.nl](http://www.somo.nl)
- b) Portales oficiales revisados (julio-agosto 2015):
- ✓ ABC (Brasil) – [www.abc.gov.br](http://www.abc.gov.br)
  - ✓ AECID (España) – [www.aecid.es](http://www.aecid.es)
  - ✓ AMEXCID (México) - <http://amexcid.gob.mx/>
  - ✓ AusAID (Australia) - <http://dfat.gov.au/aid/Pages/australias-aid-program.aspx>
  - ✓ Banco Mundial, Proyectos y operaciones por país- <http://www.bancomundial.org/projects/country?lang=es&page=>
  - ✓ BID - <http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html>
  - ✓ BNDES. Insercao internacional - [http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes\\_pt/Areas\\_de\\_Atacao/Exportacao\\_e\\_Insercao\\_Internacional/](http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atacao/Exportacao_e_Insercao_Internacional/)
  - ✓ CAF – [www.caf.com](http://www.caf.com)



- ✓ Comisión Europea (Europeaid), América Latina - [http://ec.europa.eu/europeaid/node/7336\\_en](http://ec.europa.eu/europeaid/node/7336_en)
- ✓ Corporación Financiera Internacional (IFC) - <http://www.ifc.org>
- ✓ DIFD - UKAid (Reino Unido) - <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development>
- ✓ GIZ (Alemania) – [www.giz.de](http://www.giz.de)
- ✓ IPEA (Brasil) – [www.ipea.gov.br](http://www.ipea.gov.br)
- ✓ NORAD (Noruega) - <http://www.norad.no/en/front/>
- ✓ SEGIB – [www.segib.org](http://www.segib.org)
- ✓ USAID - <https://usaid.gov/>

## *Anexo II: casos identificados; resultados preliminares*

### **a) Alemania**

No se encontraron casos concretos, aunque es posible que existan dado su papel “pionero” en el financiamiento al sector privado con fondos ODA. Ministerio de Exteriores cambia políticas, declara que “los fondos de cooperación deben atender los intereses alemanes en el exterior, no solo necesidades de desarrollo de los países”.

En 2009, 27% de la cooperación era ligada. De la parte destinada a cooperación técnica, 52% era ligada.

#### ***Sugerencia:***

- *Profundizar consulta con organizaciones sindicales y sociales alemanas.*

*No hubo respuesta a la fecha*

### **b) Australia**

El gobierno australiano está cerrando los programas de ayuda al desarrollo para países de América Latina y el Caribe. Siguen siendo elegibles para algunos programas globales como **Extractive Industry Transparency Initiative (EITI)** y el **International Mining for Development Centre (IM4DC)**.

En la Web de su agencia de cooperación (AusAID) explicita que su política de cooperación está destinada a defender los intereses nacionales, mejorar su imagen, y crear oportunidades para sus empresas en el exterior.

#### **Ejemplos concretos:**

1. A través del **Australian Mining for Development Initiative (AMDI)** se destinaron fondos a fortalecer capacidades (formación de funcionarios) en **Argentina, Chile y Perú**. Aparentemente no se financiaron obras (lo que sí ocurre en África). En los informes de evaluación oficiales de las Agencia Australiana de Cooperación (AusAID), se dice explícitamente que el programa ha sido exitoso, que ha contribuido a mejorar la imagen de Australia y ha favorecido el ingreso de mineras australianas en dichos países.
2. AusAID, junto con cooperación de Alemania y Chile, financió el proyecto **Paraguay for All**. El gobierno australiano reconoce en sus informes de evaluación dificultades de implementación. No se encontraron denuncias específicas.
3. AusAID, con cooperación de Chile, implementó proyecto sobre **minería en Honduras** bajo la iniciativa AMDI. No se encontraron denuncias específicas.

**Observación:**

En una recorrida de noticias periodísticas, se puede ver que en coincidencia con el programa ha habido un crecimiento de la cantidad de empresas mineras de origen australiano operando en el Perú (noticias de 2015 hablan de 93 empresas)

**c) Comisión Europea – Latin America Investment Facility (LAIF)**

Existen actualmente 25 proyectos. En 2011, de 8 proyectos solo 1 estaba dirigido a PyMES locales, el resto eran empresas de Europa/multinacionales. No hay demasiada información oficial, pero sí hay denuncias generales.

Ejemplo concreto:

Proyecto en **Nicaragua**, los fondos bilaterales de España se bloquearon por denuncias de corrupción en el gobierno. Al entrar en el mecanismo LAIF se desbloquearon porque este fondo no tiene los mismos requerimientos ya que los fondos van directo al sector privado.

**d) España**

Es de la que se encontró mayor información, muy probablemente por el volumen de ayuda hacia América Latina, y porque hay un muy buen seguimiento de los proyectos por parte de organizaciones sociales españolas.

Ejemplos concretos:

1. Fondos del **Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento - FCAS** para mejoras en el sistema de saneamiento en barrios marginales de **Cartagena de Indias, Colombia**. Las obras las realiza Aguas de Cartagena (concesionaria desde 1995, capital mayoritario pertenece a **Aguas de Barcelona hasta 2010**).
2. Fondos de la **Cooperación Empresarial al Desarrollo -CAP 11** para proyectos de RSE de la empresa **REPSOL-YPF Ecuador** con poblaciones indígenas de áreas de Amazonia, donde la empresa tiene operaciones con alto impacto ambiental.
3. **Créditos FAD** en beneficio de intereses españoles en **Nicaragua**: a) entrada y el posterior monopolio en la distribución de la eléctrica española Unión **FENOSA**; b) construcción de la carretera de Masaya en una zona turística con intereses españoles cuando en realidad estaban destinados originalmente a apoyar a los damnificados por el huracán Mitch; c) 30% de las operaciones de FAD en el periodo 1999-2006, a favor de **INDRA**.

#### e) Estados Unidos

No se encontró demasiada información oficial (la información puesta a disposición por USAID es pobre).

##### Ejemplos concretos:

1. Denuncias sobre el uso de fondos de USAID, a través del programa **WADA con Coca Cola**, para construcción de plantas de tratamiento en lugares donde la empresa necesita fuentes seguras de agua, siendo que la población cercana no puede acceder al servicio por lo elevado de los costos.
2. Fondos USAID para programa de RSE **Walmart México y Centroamérica**. Proyecto "Una mano para crecer", para mejorar la integración de PyMES en la cadena de proveedores de Walmart.

#### f) Grupo del Banco Mundial

De más de 100 proyectos con préstamos del BM que tienen denuncias de desplazamiento de población, se analizaron 15 en los que los fondos venían de otros donantes que no fuera el propio Banco. Los proyectos en los que había participación de privados eran con financiamiento de MDL, no declarados como AOD.

Se identificaron cuatro proyectos que recibieron financiamiento del **International Finance Corporation (IFC)** y que presentan violaciones de DDHH:

1. **Honduras:** financiamiento a Corporación Dinant, dedicada al agronegocio (aceite de palma). Ocupación de tierra, asesinatos.
2. **Nicaragua:** financiamiento a Hidro Santa Cruz (filial de Hidralia, España) para construcción de hidreléctrica. Resistencia y conflictos con comunidades locales: amenazas, secuestros, etc
3. **Guatemala:** financiamiento a HidroXacbal. Posible conflicto con comunidades locales por ocupación de territorio.
4. **Nicaragua:** financiamiento Grupo Pellas, dedicado a cultivo de caña de azúcar. Posible violación de derechos humanos y laborales

Se encontraron denuncias de ONGs y organizaciones sociales de Haití sobre financiamiento del **Banco Mundial** para la revisión (supuestamente flexibilización) del **marco regulatorio de minería en Haití**, pero no se encontró información oficial del Banco Mundial o del gobierno sobre un proyecto de asistencia técnica o similar que pudiera relacionarse con estas denuncias.

#### g) Noruega

Solo dos proyectos en América Latina:

**1. Fondos reconstrucción Haití**

**2. Oil Fund en Nicaragua, involucra al Banco Mundial**

Apoyo para fortalecimiento institucional y favorecer clima de negocios. No se encontraron denuncias.

#### h) Reino Unido

Destina 2,5% de su AOD a LAC: Guatemala (1,2%), Jamaica (0,3%), Haití (0,23), Colombia (0,17), México (0,14), Brasil (0,13)

Denuncias en la Web sobre proyectos en África y Asia. Por ejemplo, financiación de las reformas de las leyes de semillas (Monsanto), construcción de hoteles de lujo, etc. No se encontraron denuncias de proyectos en América Latina.